



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Oscar Shuberoff

Rector

Alfredo André

Secretario de Extensión

Alejandro Guede

Subsecretario de Coordinación Administrativa

Hernán Labate

Subsecretario de Convenios y Transferencias

Pablo Alessandrini

Subsecretario de Extensión Cultural

Paula Chinellato / Prensa y Comunicación

Esteban Carestia / Administración

Mariana Ron / Programación

Hernán Casabella / Producción

Serie extramuros:

Coordinación: Prof. Ricardo Sidicaro y Lucas Rubinich

Corrección final y estilo: el autor

Revisión: Javier Mariani

Diseño de tapa e interiores:

DG CCRR UBA

Primera edición: abril de 2002

© 2002



Libros del Rojas
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS

ISBN 987-1075-10-3

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723

No se permite la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopia u otros medios sin el permiso previo de la editora.

Javier Auyero

la protesta

RETRATOS DE LA BELIGERANCIA POPULAR
EN LA ARGENTINA DEMOCRÁTICA



Libros del Rojas
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	11
Tilly en Argentina	17
CAPÍTULO 1	
Tres casos	21
Dos días en el Noroeste: el Santiagazo	22
Una semana en el Sur: la pueblada	22
Seis meses en el Noreste: la Plaza del Aguante Correntino	24
Cortes vs. huelgas: falsa dicotomía	23
Los sospechosos de siempre	26
CAPÍTULO 2	
Desproletarización, retirada del estado y descentralización	27
La retirada del estado y el hiperdesempleo vistos desde abajo	31
"El Sol"	34
CAPÍTULO 3	
Mediaciones	35
Redes políticas y clientelismo en la protesta	37
CAPÍTULO 4	
Procesos políticos	43
Santiagazo: salarios y castigo	44
La Plaza del Aguante Correntino	5
"El Tata" y "El Tato"	6
CAPÍTULO 5	
Identidades insurgentes	
Seis días en el Sur: la pueblada	
En búsqueda de visibilidad	
CONCLUSIONES	
Bibliografía	

INTRODUCCIÓN

“Hemos de saber que una nueva era ha comenzado no cuando una nueva élite toma el poder o cuando aparece una nueva constitución, sino cuando la gente común comienza a utilizar nuevas formas para reclamar por sus intereses.”

Charles Tilly, *The Contentious French*

Si bien inéditos por su magnitud y por sus consecuencias, los episodios de diciembre de 2001 —en los que una combinación de saqueos, cortes de calles y rutas y cacerolazos hizo renunciar a un presidente votado por el 48% de la población dos años atrás— deben ser enmarcados en los cambios que la acción colectiva ha sufrido en los últimos tiempos en Argentina. Lejos de ser una “explosión” de una ciudadanía que hasta entonces parecía “ensimismada, incapaz de expresar su descontento”¹, Diciembre representa el punto álgido de un proceso de movilización popular que lleva casi una década.

Los momentos de la última década sirven para ejemplificar las recientes modalidades de protesta. Entre abril y junio de 1997, cortes de ruta en demanda de empleo y ataques a edificios públicos se multiplicaron en el país. En abril, las ciudades de Cutral-có y Plaza Huincul fueron sitiadas durante varios días en reclamo del cumplimiento de las promesas realizadas por el gobernador luego de que los habitantes de la zona realizaran su primera *pueblada* en reclamo de fuentes de trabajo en junio de 1996. Tres meses más tarde, autoridades de los gobiernos provincial y municipal fueron tomadas como rehén en el edificio municipal de Cutral-có por unos trescientos manifestantes que reclamaban un aumento en los subsidios de empleo. En mayo, veintiún cortes de ruta organizados por gremios municipales y organizaciones de desempleados aislaron a la Provincia de Jujuy durante doce días, motivando la renuncia de todo el gabinete ministerial del entonces gobernador Ferraro. Cutral-có y Jujuy son tal vez los casos más recordados, pero no fueron los únicos. En esos meses, *piqueteros*, *fogoneros* y *zanjeros* cortaron la Ruta Nacional N° 3 en Trelew (Chubut) durante un día en demanda de puestos de trabajo; vecinos y desocupados organizados en una multisectorial interrumpieron el tráfico en la Ruta Nacional N° 38 en Cruz del Eje (Córdoba); municipales que pedían la incorporación a la planta permanente de la municipalidad y el pago de sueldos atrasados cortaron la ruta 11 en Capitán Bermúdez (Santa Fe). También ocurrieron cortes de rutas en Catriel (Río Negro), Banda del Río Salí (Tucumán) y la ciudad de Neuquén, mientras los maestros de todo el país confluían en la Plaza de los Dos Congresos (Buenos Aires) y levantaban allí la

llamada "Carpa Blanca". A propósito del prolongado corte de la ruta 34 en Tartagal y General Mosconi en mayo, el gobernador salteño Romero (quien no era precisamente un simpatizante de esta forma de protesta) es quien mejor resume lo que estaba sucediendo en este periodo de *mobilización popular* cuando decía que el corte de ruta era "una práctica de acción política que se está divulgando en todo el país".

Luego de poco más de tres años, en noviembre de 2000, esta forma de protesta ya ha sido aprendida y adoptada en todo el país. Los cortes se sucedieron en Isidro Casanova, Esteban Echeverría y Glew (Buenos Aires), Plottier (Neuquén), Salvador Mazza, Tartagal, General Mosconi, Cuña Muerta y Zanja Honda (Salta), Libertador General San Martín (Jujuy), Resistencia (Chaco) y Belén (Catamarca).

Analistas locales y extranjeros han señalado a la pobreza y al desempleo como razón y sentido de este ciclo de protestas. Los llamados estallidos, los cortes de ruta y las *puebladas* que se generalizaron en el país durante los años 90 fueron, según este sentido común dominante, respuestas a un estímulo económico. Para explicar la protesta bastaría entonces con mencionar una subida en la tasa de desempleo, un crecimiento de los niveles de pobreza, una falta de pago a empleados públicos o, como en el caso de los *cacerolazos*, una indebida retención de los depósitos bancarios. Desde esta perspectiva, las acciones beligerantes de la multitud eran vistas como intromisiones en el curso rutinario de los eventos, como compulsiones casi mecánicas, poco conscientes, poco organizadas y caóticas. El historiador inglés E. P. Thompson denominó a esta

perspectiva "visión espasmódica de la historia popular". En su clásico texto sobre la economía moral de la multitud inglesa, Thompson formula la pregunta que sirve de punto de partida a este ensayo: "¿qué hace la gente cuando tiene hambre? ¿De qué forma las costumbres, la cultura y la razón modifican su comportamiento?" Pregunta que le sirve para adentrarse en las experiencias de la rebelión popular y en las maneras en que ésta es vivida y sentida. ~~Pregunta~~ que utilizaré de guía para, en las páginas que siguen, explorar las causas estructurales de la protesta, sus modalidades y las vivencias e identidades de sus protagonistas con el objetivo de cuestionar la ecuación *desempleo + pobreza = protesta*. No hace falta demasiado análisis para darnos cuenta de que los desempleados que cortan una ruta no tienen trabajo. Sin embargo, el desempleo, el hambre o la necesidad económica no conducen necesariamente al corte de ruta ni a la quema de un edificio; constituyen, sí, las bases sobre las cuales se erige la beligerancia popular. Pero la forma de la protesta tiene que ver con procesos políticos y con formas de reclamo aprendidas en repetidos enfrentamientos con el estado y con su relativo éxito o fracaso. Las maneras en que la gente formula sus reclamos tiene que ver entonces con la política y con la cultura de la acción colectiva. Este ensayo se ocupa de estos dos aspectos.

Así como la supuesta explicación "el hambre o la desocupación lo hizo" es desacertada, la afirmación —muy popular en círculos académicos internacionales— "la globalización lo hizo" es igualmente errónea. La mayoría de estas protestas pueden ser caracterizadas como *protestas locales* en tanto son el producto de la interacción de

DEUDA y JOSSE

fuerzas globales con dinámicas locales. Ciertamente es que, en *última instancia*, la crisis de la deuda externa y el *ajuste estructural* que los organismos financieros internacionales fuerzan sobre los distintos gobiernos para que éstos cumplan con sus obligaciones son las causas de la ola de acción colectiva en el sur global. Pero estas fuerzas y determinaciones externas nunca impactan de manera directa en la protesta. En otras palabras, la identificación de los factores macro y su relación con esta ola de protesta difiere del examen de la cadena causal que la produce. En este trabajo argumento que para un abordaje más adecuado de la génesis de las protestas en la Argentina democrática debemos centrar nuestra atención en el *campo de protesta* —definido como un ensamble de mecanismos y procesos que se hallan en la raíz de la formulación de reclamos colectivos— como *mediador* entre las fuerzas globales y las "explosiones" locales. El *campo de protesta* refracta como un prisma los determinantes externos en términos de su propia lógica. Sostengo que sólo a través de tal refracción los factores externos pueden tener un efecto en la formulación de reclamos y, por ende, en la protesta. El argumento no debe ser entendido como una *priorización* de los *procesos locales* por sobre los globales en la *cadena causal* que produce la protesta sino como un llamado —en tiempos en que la retórica de la globalización es utilizada para *explicar todo*— a una radical contextualización de la política *beligerante* popular. Las fuerzas *globales* se articulan de *manera compleja* con la política a niveles nacional, regional y local. Este libro procura mirar de cerca las articulaciones vernáculas de los procesos globales y examinarlas en localidades concretas.

el análisis y pregunta de protesta

Protestas
globales

FINAL

Entre los numerosos observadores de las nuevas formas de protesta, quizás sea Marina Farinetti quien más detalladamente ha diagnosticado las transformaciones en la beligerancia popular ocurridas a partir de los inicios de la década del 90³. De acuerdo a la autora de *¿Qué queda del movimiento obrero?* la década del 90 está marcada por el desplazamiento del conflicto laboral del área industrial al sector público, la disminución del número de reclamos por aumentos salariales y el crecimiento de la cantidad de demandas por pago de salarios adeudados y por despidos, la reducción del total de huelgas y el incremento del número de cortes de ruta, ollas populares y huelgas de hambre como modos de acción colectiva, el aumento de la frecuencia de la protesta en las provincias y el creciente protagonismo de los gremios provinciales y municipales como actores centrales del conflicto³. De acuerdo con Farinetti, estas protestas “devinieron en formas de organización popular nuevas: asambleas populares, organizaciones no gubernamentales, etc. Estas formas de organización recrearon, o crearon, redes sociales. Más que las protestas de los estatales en las provincias por el pago de salarios atrasados o contra medidas de ajuste, los cortes de ruta llevaron la política a territorios rezagados y colocaron el tema de la desocupación y las consecuencias sociales de la política socioeconómica del gobierno en el centro del debate.”

A pesar de la gran variedad de formas de protesta que se dan durante los 90, las modalidades por las cuales la gente común formula sus reclamos parecen agruparse en un conjunto limitado y bastante bien definido de tipos de acción. Estas formas no cambian radicalmente entre una

fase y la otra (digamos entre abril y junio de 1997 y noviembre del 2000) cuando actores similares (desocupados y/o empleados públicos) son quienes activan la protesta. Es más, los manifestantes parecen darse cuenta de esta recurrencia al referirse pública y análogamente a sus acciones y a las acciones de otros (el corte) y a sus autodefiniciones y a las de otros manifestantes (siendo *piqueteros* la denominación que comienza a aparecer con más frecuencia). Tenemos, entonces, todas las indicaciones que señalan la emergencia de una forma de protestar: un cúmulo de rutinas aprendidas y compartidas mediante las cuales grupos sociales formulan colectivamente reclamos al estado.

Tilly en Argentina

El sociólogo e historiador norteamericano Charles Tilly es quien más ha estudiado la relación entre el cambio social de gran escala y el carácter de la acción colectiva. Su teoría de “repertorio de acción colectiva” y su análisis de las transformaciones estructurales en la raíz de los cambios en la beligerancia popular nos ofrecen una poderosa herramienta para diagnosticar la mutación de los medios y los sentidos de la lucha popular en la Argentina neoliberal.

El término repertorio “identifica un conjunto limitado de rutinas que son aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado.” Los repertorios —afirma Tilly— son creaciones culturales aprendidas que “no descienden de una filosofía abstracta” ni —podríamos agregar— del “espíritu del pueblo”, sino que emergen de la lucha, de las interacciones entre ciudadanos y estado.

11 En
minar

1 En primer lugar, la idea de repertorio nos invita a examinar las regularidades en las maneras de actuar colectivamente en la defensa o prosecución de intereses compartidos. Esta recurrencia no elimina la innovación en las formas que, como la forma corte de ruta, están generalmente asociadas a su éxito relativo y que muchas veces se transmiten por una suerte de efecto contagio al cual las autoridades suelen prestar mucha atención.

2 En segundo lugar, Tilly nos previene contra un error bastante generalizado entre los observadores de la protesta: las aflicciones, los problemas sociales (llámense pobreza, desempleo, hambre o retención de depósitos) no bastan para provocar la protesta. La beligerancia surge de procesos políticos particulares y se expresa de acuerdo a maneras más o menos establecidas de actuar colectivamente (lo que no descarta —por cierto— improvisaciones que asociadas a logros en la obtención de una demanda pasan a formar parte del repertorio).

3 Tercero, el modelo que Tilly nos ofrece para vincular transformaciones estructurales con cambios en la acción colectiva es un modelo que combina distintos niveles de análisis que van desde cambios macro como la (des)proletarización o los procesos de formación (o retirada) del estado a los patrones de interacción entre estado y ciudadanos. Este modelo nos invita a mantener unidos conceptualmente macroestructuras y microprocesos, cambios en la economía y cambios en las interacciones políticas.

4 Por último, el concepto de repertorio ubica a la cultura en el centro de las formas de acción colectiva al hacer foco en los hábitos de beligerancia adoptados por los dis-

tintos actores y en las formas que toma la acción colectiva como resultado de expectativas compartidas e improvisaciones aprendidas. El concepto, entonces, nos invita a combinar dos intereses que por mucho tiempo han estado divorciados: el impacto que tiene el cambio estructural en la protesta y los cambios en la cultura de la lucha popular.

¿Cuáles son las lecciones principales que podemos extraer de Tilly para entender la reciente ola de protesta? Lejos de ser furiosos y hambrientos Robinsons Crusoes en busca de subsidios, bolsas de comida o depósitos bancarios, quienes protestan constituyen redes de actores con creencias más o menos compartidas y formas de lucha aprendidas a lo largo del tiempo. Si sabemos mirar, estas aparentemente caóticas marchas, cortes y ataques a edificios públicos expresan un repertorio.

¿Cómo y por qué cambia este conjunto de formas y sentido de la beligerancia popular? Los cambios macroestructurales no afectan a la acción colectiva de manera directa sino que impactan en los intereses, las oportunidades y la organización de la gente común. Anticipando abreviadamente el argumento que detallaré en este libro, el modelo propuesto por Tilly nos ayuda a entender la manera en que tres macro-procesos que caracterizan a la Argentina en los 90 (la generalización del hiperdesempleo, la retirada del estado en su función de semi-bienestar y la descentralización de los servicios educativos y de salud) impactan en los medios y sentidos de la acción colectiva al modificar los intereses—en términos un tanto simplificados podemos decir que el interés dominante pasa de ser la defensa del salario a la defensa de las fuentes de trabajo y

SALARIO POR FUENTES DE TRABAJO

luego la obtención de subsidios de desempleo—, las *oportunidades* —al colocar a los gobiernos provinciales como objeto de demandas— y la *organización* de la gente común —convirtiendo a los gremios de empleados públicos y las nuevas y múltiples organizaciones de desempleados en actores principales de la protesta. Intereses, oportunidades y organizaciones que, en casos de corrupción generalizada en las administraciones provinciales y municipales, confluyen en la formación de una identidad beligerante que enfrenta a manifestantes con funcionarios y/o políticos.

¹ Carlos Gabetta, *Le Monde Diplomatique* (edición en inglés), enero de 2002.

² Pueden consultarse también los trabajos de Federico Schuster y Adrián Scribano.

³ De acuerdo con un informe del Centro de Estudios Nueva Mayoría, la cantidad de cortes de ruta casi se cuadruplicó de 1997 a 2000. Además, su frecuencia no guardó relación con la cantidad de habitantes de las provincias en las que ocurrieron.

CAPÍTULO 1

Tres casos

Durante la última década los cortes de rutas, puentes y calles, la ocupación de espacios públicos como las plazas y los ataques a edificios públicos se convirtieron en los medios predominantes mediante los cuales la gente común actuó colectivamente en defensa de sus intereses. En la mayoría de las ocasiones en que los manifestantes convergieron en una barricada, una plaza o frente a un edificio público o la residencia de algún funcionario, la identidad colectiva construida se refería a la división entre “pueblo” y “funcionarios/políticos” corruptos. En consecuencia, no sólo las formas sino también los sentidos de la protesta parecen reconocer cierta regularidad durante la última década. El Santiagazo de 1993, la pueblada de Cutralcó y Plaza Huincul de 1996 y la “Plaza del Aguante Correntino” de 1999 son quizás la mejor síntesis de esta forma emergente de protesta y de una identidad colectiva en formación.

Los sospechosos de siempre

La diversidad de la beligerancia popular fue enfrentada por las élites gubernamentales con una combinación de *negociación* (en la que el reparto de planes de empleo y de comida —muchas veces a través de mecanismos clientelares que dieron lugar a nuevas protestas— y el temor al “contagio” o el “efecto dominó” cada vez que los manifestantes obtenían parte de sus demandas fueron dominantes), brutal *represión* (antes de los hechos de diciembre de 2001 —entre 1995 y 2001— se registraron cientos de manifestantes heridos y ocho muertos en enfrentamientos con la policía o la gendarmería: Víctor Choque en Usuhuaia, 1995; Teresa Rodríguez en Cutral-có, 1997; Franciso Escobar y Mauro Ojeda en Corrientes, 1999; Anibal Verón, Carlos Santillán, Oscar Barrios y Víctor Jofré en Salta, 2000 y 2001) y los usuales intentos *clasificadores/ criminalizadores* que los funcionarios nacionales y provinciales, menemistas o de la Alianza, utilizaron para ver en cada marcha, corte o demostración de oposición a una multitud inocente liderada por activistas y “pasivo instrumento de agitadores externos” —como diría George Rudé. Estas acusaciones van del ya usual mote de “subversivos” de procedencia disímil (militantes de Sendero Luminoso ocultos entre las “hordas” en Santiago del Estero en 1993, activistas de Quebracho al acecho entre los “vándalos” y “criminales” en Cutral-có en 1997) al más imaginativo pero tampoco probado “los piqueteros [salteños, en mayo de 1997] fueron comprados por los traficantes de drogas para que los gendarmes se concentren en la ruta y dejen de custodiar la frontera”, pasando por la visión de la protesta como producto de “activistas perfectamente entrenados” (Salta, junio de 2001) hasta la infame —y finalmente letal— acusación de “enemigos de la República” a los protagonistas de los eventos de diciembre de 2001 por parte del ex-presidente De la Rúa.

CAPÍTULO 2

Desproletarización, retirada del estado y descentralización

“La falta de porvenir, otrora reservada a los condenados de la tierra, es una experiencia cada vez más extendida y, por ende, modal.”

Pierre Bourdieu, *Meditaciones pascalianas*

El contexto estructural de este aumento de la beligerancia popular está caracterizado por tres procesos que, si bien pueden ser separados analíticamente, se encuentran en la raíz de la protesta de manera simultánea y se refuerzan mutuamente: desproletarización, retirada del estado en su función de bienestar y descentralización de los servicios educativos y de la salud.

1. El aumento explosivo de la desocupación productiva de la desindustrialización del país y de la desconexión

funcional entre las tendencias macro-económicas y los niveles de empleo (la tasa de desempleo subió del 5% de la población económicamente activa en 1974 al 18% en 2001; desde el lanzamiento del "Plan de Convertibilidad" en 1991, el desempleo creció un 200% en el país) ha sido objeto de numerosos y detallados estudios por lo que no me detendré aquí en este aspecto (se pueden consultar los excelentes trabajos de Lo Vuolo y Barbeito, 1993; Beccaria y López, 1996; Murmis y Feldman, 1996). La pobreza (y la desigualdad) han acompañado al crecimiento de la desocupación. En 1980, el 11,5% de los hogares estaba *debajo de la línea de pobreza* en el Gran Buenos Aires. En 1995, uno de cada cuatro entraban en esa categoría. Decenas de miles de personas caen debajo de la línea oficial de pobreza todos los meses de manera constante desde fines de los 90. Como sintetiza Aronson (2001): "Los pobres eran el 21,5% de la población en 1991 y el 27% al final del período (en 2000). Los indigentes eran el 3% de la población, para alcanzar el 7% en 2000. Los desocupados y subocupados, aproximadamente 1.600.000 personas al comienzo de la década, superaban los 4.000.000 al fin de la misma".

2. La retirada y el desmantelamiento del estado de bienestar-populista hacen que los riesgos implicados en situaciones de privación material sean aún mayores. En la última década, la Argentina ha asistido a un proceso de constante degradación de los sistemas públicos de educación y salud y de las políticas de vivienda dedicadas a sectores de bajos ingresos. El carácter caótico de las políticas destinadas a "combatir el desempleo" y de las políticas sociales destinadas a "combatir la pobreza" hace que la situación sea aún peor; los pobres son cada vez más débiles y están

cada día más desprotegidos. El estado ha demostrado una particular indiferencia respecto del destino de los desempleados: el seguro de desempleo cubre a una escasa proporción de quienes perdieron su trabajo y el dinero otorgado en cada subsidio no alcanza a cubrir sus necesidades básicas.

La privatización de las empresas estatales no es sólo otro aspecto de la retirada del estado de sus funciones básicas sino que tiene un importante impacto en los niveles de empleo. Entre 1989 y 1999, aproximadamente 150.000 trabajadores perdieron sus trabajos como consecuencia directa del proceso de privatizaciones. En 1989, cerca de medio millón de trabajadores estaban empleados en las compañías estatales de teléfonos, correos, aviación, agua, energía, transporte ferroviario y gas. En 1999, estas empresas ocupaban a sólo 75.000 personas. Como veremos, el caso de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) es de particular importancia dado que muchos de los despidos ocurrieron en comunidades cuya existencia dependía en buena medida de la presencia de esta empresa (Cutral-có y Plaza Huincul en Neuquén, Tartagal y General Mosconi en Salta, por ejemplo).

3. Junto al hiperdesempleo y a la retirada del estado en su función de bienestar (ya que su función represiva no ha menguado), el proceso de descentralización de los servicios educativos y de salud, si bien no ha sido estudiado en relación con el aumento de la protesta, resulta de crucial importancia para entenderlo. A partir de 1989, los servicios educativos (sobre todo la educación media) y los de salud comienzan a ser transferidos de la órbita del gobier-

no federal a las provincias (para estudios detallados del proceso, se puede consultar Rodríguez Larreta y otros, 2000 y Rothen, 1999). Este proceso de descentralización profundizó la crisis de ambos sectores, dado que las administraciones provinciales tuvieron que afrontar esta nueva responsabilidad con sus escasos recursos financieros. Como afirma Rodríguez Larreta: "el personal no sólo está sujeto a los bajos salarios en el sector, sino que ese hecho se combina conflictivamente, al tratarse de empleados públicos provinciales, con las recurrentes crisis de las economías de las jurisdicciones subnacionales." Esto transforma a los gobiernos provinciales en objetos de demandas por parte de los ahora provinciales empleados públicos. El aumento de la protesta por parte de docentes y trabajadores de la salud en las provincias (los llamados "jeringazos" en los hospitales públicos de Corrientes y los innumerables paros en la educación) es difícil de comprender si no se tiene en cuenta que, como consecuencia directa del proceso de descentralización, cambia el blanco de las demandas, el *locus* de la acción colectiva; la protesta se traslada del reclamo al estado nacional (antes responsable por salarios, condiciones de trabajo e infraestructura) al ámbito provincial —ya veremos cómo esto se expresa claramente en el caso de Santiago en los conflictivos inicios de 1993.

La desproletarización y la retirada del estado ubican a nuevos actores (desempleados) y a nuevas demandas (empleo) en el centro de la escena junto a trabajadores, en la mayoría de los casos del sector público, exigiendo sus salarios impagos. Por su parte, la descentralización convierte a las administraciones provinciales en el objeto de los reclamos; en ciertos casos, la corrupción generalizada

de éstas hace que —como veremos— las identidades que se construyen en la protesta adquieran un carácter político específico.

La retirada del estado y el hiperdesempleo vistos desde abajo

"Pero está tan frío en Cutral-Có... me han contado que una vez, esta tierra floreció, primaveras de niñez, fertilidad, petróleo y pan, petróleo y paz. ¿Adónde se han ido los días de ayer?"

Sergio García, *Mensajes de Invierno*

Retrato

Plaza Huincul y Cutral-có se originan y desarrollan a partir de la actividad petrolera. Desde sus comienzos en 1918 y 1933, respectivamente, ambas ciudades crecieron al ritmo (y se volvieron altamente dependientes) de los beneficios provistos por la extracción de petróleo y las actividades de la compañía estatal YPF. Al descubrimiento del *oro negro* en la región le siguió su ocupación territorial y el asentamiento poblacional, ambos llevados a cabo con el auspicio estatal. El rápido crecimiento demográfico de ambas ciudades refleja la expansión de las actividades de YPF: entre 1947 y 1990 el total de la población creció de 6.452 a 44.711 habitantes, un crecimiento demográfico imprecionante bajo cualquier estándar. El estado de bienestar representado por YPF otorgaba a sus obreros salarios más altos que el promedio nacional, viviendas modernas servidas por el mismo personal de la empresa ("cualquier cosa que se rompía era arreglada por YPF", me comentaban ex-obreros de la compañía), acceso a un excelente

hospital, obra social y vacaciones pagas ("una vez al año teníamos pasajes gratis y dos semanas de hotel pagas en Buenos Aires o en cualquier lugar del país"). El bienestar de YPF se extendía más allá de los límites de la empresa: toda la vida económica y social de la región estaba dinamizada por su presencia. YPF construyó barrios enteros, realizó tendidos de luz y cloacas y construyó un moderno hospital, un teatro y un centro deportivo.

En menos de dos años, un sistema económico y una forma de vida que duró más de cuatro décadas se hizo trizas. La privatización de YPF fue sancionada por el Congreso de la Nación el 24 de septiembre de 1992; y ya desde antes se hacían sentir sus devastadores efectos en ambas comunidades. YPF no sólo redujo su personal de 4.200 operarios a 600 en menos de un año (Favaro y otros, 1997) sino que dejó de ser la empresa-bienestar alrededor de la cual la vida de ambas ciudades giraba, convirtiéndose en una industria de enclave conducida bajo premisas estrictamente capitalistas.

Los titulares de los principales diarios regionales capturaron el clima de desconcierto generalizado cuando comenzaron a sentirse los primeros impactos de la "modernización del estado": "Futuro incierto aguarda a Cutral-có y Plaza Huincul", "Alarmante desocupación en zona petrolera", "La lucha por no ser otro pueblo fantasma". Mientras ocurrían despidos masivos, los artículos en los principales periódicos describían el "sentimiento de incertidumbre" acerca de los inicios de un proceso que hoy se encuentra en su forma avanzada: el hiper-desempleo. En Cutral-có, el 30% de la población económicamente activa

(25.340 habitantes) estaba desempleado en 1997. En la actualidad, más de la mitad de la población de ambas ciudades vive debajo de la línea oficial de pobreza (Favaro y otros, 1997:17)⁵.

Lejos de allí, en el extremo norte del país, un residente de General Mosconi (Provincia de Salta) describía a su ciudad en términos dolorosamente familiares para los cutralquenses y huinculenses: "Hace diez años, Mosconi se transformó en un pueblo fantasma. La privatización de YPF marcó el fin de una época dorada. Mi marido trabajó durante veinte años en el correo y siempre hablaba de los enormes aguinaldos que cobraban los empleados de la empresa petrolera. Ahora, la gente tiene que salir a cortar la ruta para recibir poco más que una limosna."

⁵ Desde 1991, el crecimiento del PBI viene de la mano del aumento del desempleo. De acuerdo con datos del Banco Central y del Ministerio de Economía el crecimiento del PBI fue de 8,9% en 1991, 8,7% en 1992, 6% en 1993 y 7,4% en 1994. Durante esta fase expansiva de la economía la tasa de desempleo creció —de acuerdo a las mismas fuentes— del 6,9% al 10,7%. En las firmas industriales líderes, la desconexión funcional entre crecimiento económico y empleo es aún más clara. Entre 1991 y 1994 el PBI de estas firmas creció un 35% mientras redujeron su personal en un 10%.

⁶ En marzo 2001, sólo el 35% de los desempleados recibían subsidios (de un promedio de \$150) de los gobiernos nacional o provincial.

"El Sol"

Kelio y María Esther inauguraron la panadería *El Sol* en 1961. Enfermera profesional en Salta, María Esther llegó a Cutral-có en los años 50 para trabajar en el único hospital que la zona tenía en ese entonces, administrado por la Exxon Oil Company. Allí conoció a Kelio, quien estaba "trabajando en el campo, en los pozos de petróleo." Kelio renunció a su trabajo y con la ayuda de un amigo abrió la panadería que durante treinta años sería la principal de la localidad, empleando a catorce personas (tres en el mostrador, cinco panaderos, cinco confiteros y un encargado de la distribución) y utilizando 500kg. de harina por día para preparar varias tandas de pan. Hoy, la panadería es administrada por Kelio en el mostrador y Ricardo, uno de sus hijos, trabaja en el único horno en funcionamiento y está a cargo de la distribución. Utilizan menos de 150kg. de harina y el antiguo local de la panadería se transformó en un depósito donde almacenan la vieja e inútil maquinaria y las vitrinas que solían contener "las tortas, las macitas y los sandwiches de las que todos hablaban en la ciudad." María Esther acota: "El Sol... ¿viste qué desolación?" La municipalidad local compra actualmente la mayor parte de la producción para distribuirla en los comedores populares. "Eso nos ayuda bastante", admite Kelio. "Todo se puso feo cuando cerró YPF", agrega María Esther y es inútil recordarle que YPF no cerró sino que sólo cambió de manos. "Nos empezamos a achicar y mirá lo que somos ahora... no nos queríamos deshacer del lugar porque es la vida de mi marido. Él solía ir al club, a estar con los amigos. Pero ahora no va más, porque hay que tener plata para eso... para invitar una copa a los amigos, invitar una cena; es mejor quedarse en casa para no pasar vergüenza." María Esther y Kelio tienen más de setenta años y la casa donde vivieron por más de cuarenta años y criaron a sus hijos y nietos —y a la que generosamente me invitaron durante mi estadía en Cutral-có— está hipotecada por una deuda al Banco de la Provincia. "Creo que la vamos a perder", me dice María Esther, resignada. Y luego describe su aislamiento y la ruptura de los lazos que solían unirla a la comunidad local: "No, ya no salgo de casa. Para no pasar vergüenza. ¿Viste? Me volví como una ermitaña."

CAPÍTULO 3

Mediaciones

Si algo nos han enseñado los estudios de la protesta, los movimientos sociales y la acción colectiva en general en otras partes del mundo y en otras épocas históricas —enseñanza que muchos analistas y periodistas que hablan de los eventos de Diciembre de 2001 como producto casi automático de la indignación, el hambre o la desesperación parecen olvidar— es que la miseria, la pobreza, la necesidad económica, el sufrimiento, el desempleo, el disgusto y la angustia colectiva no se traducen necesariamente en movilización popular. Es decir que la protesta, el conflicto o la violencia no son respuestas directas a las tensiones producidas por el deterioro de las condiciones de vida que surgen de las macro-transformaciones político-económicas, sino que fluyen de los procesos políticos específicos. En otras palabras, los cambios macro impactan en el conflicto a través de la estructura de poder dando

forma a los medios organizativos y a los recursos que los distintos actores tienen a su disposición. Para que la protesta ocurra hacen falta *redes asociativas previas* que activen la protesta (desde redes clientelares cuyos flujos de recursos se interrumpen dando lugar a la acción colectiva, como en el Gran Buenos Aires entre 1999 y 2001, hasta redes organizativas surgidas al calor de protestas previas, como en Salta entre 1997 y 2001 o Jujuy a partir de 1995), *oportunidades políticas* que la hagan viable (el faccionalismo entre élites suele abrir la puerta a la consecución de demandas en forma conjunta por parte de actores que están fuera del sistema político; los casos de Corrientes en 1999 y Santiago en 1993 son ejemplos claros) y *recursos* que la faciliten (desde recursos materiales como cubiertas para quemar y alimentos para sobrevivir en las barricadas —a veces provistos por grupos políticos opositores, como en Cutral-có y Plaza Huincul— hasta recursos simbólicos con los cuales enfrentar los embates retóricos de los gobernantes). Una mirada a la última década de activismo popular en Argentina no puede dejar de tener en cuenta estos elementos si no quiere reproducir una visión mecanicista de la rebelión popular que ve en cada subida de precios, en cada alza de la tasa de desempleo o en cada caída del nivel de vida una condición suficiente para el “estallido”. Una sociología rigurosa de estas formas de acción colectiva debería comenzar por cuestionar las categorías entre políticas, periodísticas y policiales de “estallido” o “explosión” que ocultan más que develan los mecanismos y procesos que están en la raíz de la rebelión popular.

Redes políticas y clientelismo en la protesta

Las prácticas clientelares de dirigentes políticos y funcionarios públicos (prácticas de distribución personalizada de favores y bienes con la intención de obtener apoyo político y votos) han sido tradicionalmente vistas par académicos y periodistas como antagónicas a la acción colectiva. La primacía de este tipo de prácticas —se entiende— frustra el surgimiento de la protesta. Sin embargo, si miramos de cerca a varias protestas en el país vemos que estas redes no se oponen sino que están profundamente imbricadas en la *génesis*, el *curso* y el *resultado* de varios episodios de beligerancia.

Temprano en la mañana del 20 de junio de 1996, una de las principales radios de Cutral-có y Plaza Huincul (Radio Victoria) emitió la noticia de la cancelación de un contrato entre el gobierno provincial y la empresa Agrium que estipulaba la construcción de una planta de fertilizantes en la zona que habría de generar alrededor de cincuenta puestos de trabajo permanentes. La radio difundió la noticia y “abrió los micrófonos a los oyentes. Se empezaron a suceder los llamados que, con el correr de las horas, se fueron incrementando.” El dueño y director de la radio, Mario Fernández, cuenta que: “entraron a llegar llamados telefónicos donde la gente decía que era lamentable lo que ocurría... que había que participar... hubo quien propuso [reunirse] en la ruta.” Quienes participaron en la pueblada recuerdan esos mensajes radiales no sólo por la manera en que la radio convocó a la gente sino también por la forma en que *presentó* la cancelación del proyecto de la planta de fertilizantes. En Radio Victoria, el ex-intendente

Escrito
 Luis Polanco
 Cuatrecasas

Adolfo Grittini y Mario Fernández, su aliado político del momento, describieron a la suspensión del proyecto como “la última esperanza perdida”, “un tremendo golpe para ambas comunidades” y “una decisión totalmente arbitraria del gobierno provincial”. Daniel, un manifestante que pasó días y noches en uno de los piquetes, recuerda: “había mucha ira... la radio... decía que había que ir a apoyar, que hacían falta personas valientes”. “Yo me enteré del corte – recuerda Zulma – por la radio... estaban hablando de la situación social”. Daniel, Zulma y muchos otros apuntan al mismo agente y a sus funciones: una de las radios locales construía un sentido de lo que estaba sucediendo y procuraba convencer a la gente de que se acercara a la ruta.

Mientras la radio emitía “la ira que sentíamos” – como me dijo Daniel – y convocaba a manifestarse en la Torre Uno sobre la ruta 22, los taxis y remises locales llevaban a la gente sin cargo. ¿Era ésta un abrupta expresión de indignación colectiva en la cual los periodistas radiales, los taxistas y remiseros eran sólo los primeros en reaccionar? Difícil creerlo. Las disputas internas dentro del entonces partido de gobierno, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), y en particular las acciones del ex-intendente Grittini (Línea Blanca), quien llevaba a cabo su lucha interna personal contra el intendente Martinasso y contra el Gobernador Sapag (Línea Amarilla), estaban en la raíz no sólo del marco de injusticia con el que se presenta la cancelación del contrato con Agrium sino también de la movilización de recursos ocurrida durante ese primer día de la pueblada. En una entrevista que pidió que no fuera grabada porque “la verdad no puede ser contada frente a un graba-

dor”, el entonces intendente de Cutral-có Daniel Martinasso me dijo:

–Grittini apoyó la protesta durante los primeros días. ¿Cómo? En primer lugar comprando un par de radios para que convoquen a la gente a la ruta.

–¿Es tan fácil comprar una radio? –pregunté.

–Mirá, yo mismo le pagué a la radio [...] para que dijera cosas lindas sobre mí y sobre mi administración. El living que vos ves al entrar a la radio lo hicieron con plata que yo les pagué... Así es la política en Cutral-có. –me explicó.

Los esfuerzos organizativos de Grittini y sus aliados –siendo Fernández uno de los más importantes– no terminaban allí. Si bien la evidencia es circunstancial, muchas fuentes consultadas (periodistas, políticos y los propios piqueteros) indicaron que él también envió camiones con cientos de neumáticos para armar barricadas y topadoras para interrumpir el tránsito. Grittini también estuvo detrás de la distribución gratuita de comida, nafta, leña y cigarrillos en los piquetes durante los dos o tres primeros días de la protesta. Hay quienes sugieren que pagó 50 pesos por noche a decenas de jóvenes piqueteros y que sus seguidores distribuyeron vino y drogas que los piqueteros pagaron con ese mismo dinero.

Las cámaras de televisión y los diarios registraron la presencia de Grittini entre los manifestantes, sobre todo durante los dos primeros días de la protesta. En una larga entrevista le pregunté sobre sus acciones en esos días. Lo que obtuve fue una firme reivindicación de la pueblada como una “acción espontánea en defensa de lo que la

gente se merece", pero ninguna mención del apoyo material brindado a la protesta. Es más, por oposición a su entonces archirival intendente Martínez, no veía conexión alguna entre el faccionalismo del MPN y el surgimiento de la protesta ("eso no tiene nada que ver con la pueblada", me dijo). Tanto él como el dueño de Radio Victoria insistían en el carácter espontáneo, natural y sorpresivo de la revuelta.

Estuvieran o no detrás Grittini y su grupo, la movilización de recursos y la construcción de la cancelación del proyecto como "decisión arbitraria" sí ocurrieron. La radio emitió los "mensajes de ira" diciendo que "algo había que hacer" y convocando a la gente a la Torre Uno, los taxis y remises conducían gratis a la gente a las distintas barricadas, alguien llevó cubiertas de autos y de camiones y distribuyó sin cargo comida, cigarrillos y otros productos. "¡Teníamos hasta pañales para bebé -recuerdan varias mujeres- en los piquetes!" La movilización de recursos y el *eumarcamiento* del problema -que según creo son precondiciones de la protesta- no ocurrieron, sin embargo, en el vacío sino en un contexto que estaba de alguna manera maduro para una revuelta de gran escala, contexto que -como vimos- estaba definido por la desaparición del trabajo asalariado y el rápido incremento de la pobreza.

Lejos de allí, un vecino de La Matanza me explicó que su hermano, beneficiario de un Plan Trabajar obtenido luego de años de participación en una Unidad Básica local, fue a uno de los cortes de ruta "invitado" por la concejal que le consiguió ese subsidio de desempleo. El corte, según esta concejal, era para "defender el plan".

Debemos prestar atención al funcionamiento de estas redes clientelares no sólo para comprender el surgimiento de la protesta sino también para entender su desarrollo. El caso del Santiagazo de 1993 es quizás paradigmático en cuanto a la relación entre estas redes clientelares y la forma que adquirió la protesta. Las residencias de funcionarios y políticos locales que los manifestantes atacaron, saquearon y quemaron el 16 de diciembre habían sido definidas como "blancos" en los meses previos. La "precisión" con la que la multitud se movió de una casa a la otra -precisión en la que algunos funcionarios y periodistas vieron la prueba de la presencia de "agitadores"- ilustra, en realidad, la existencia de un itinerario tácito, una suerte de mapa de aquellas residencias que, en palabras de otro participante, "merecían ser quemadas". ¿Cómo sabían los manifestantes quiénes "merecían" ese trato y quiénes no? La cartografía del fuego había sido construida en los meses previos mediante los reiterados escándalos de corrupción descritos en abundancia por el principal periódico local. "Lo que pasa es que en ese momento los blancos eran perfectamente visibles. Uno sabe quién es quién aquí en Santiago. Es chico, te conocés, los medios resaltan quién es quién... Era como que todo el mundo entendía que teníamos que ir ahí", me explicaba Mariano a seis años de los hechos. Por otro lado, ese itinerario tácito señalaba las residencias de los jefes políticos, los dispensadores de favores personales más notorios a quienes muchos manifestantes solían visitar con cierta frecuencia. Como me contaba Carlos, encapsulando en un comentario lo que debe ser objeto de pormenorizada investigación:

—Aquí, en Santiago, hay barras grandes que son multiuso. Jóvenes marginales a quienes el radicalismo o el peronismo les pagan el asado, los trasladan, les dan unos pesos... y son las barras de los actos. Ellos conocen todos los mecanismos para manguear a todos, desde punteros políticos hasta ministros. Y ellos no son ni radicales ni peronistas: ellos funcionan para todos. Entonces conocen la casa. Porque el político corrupto, al llevarlos, les va haciendo conocer parte de su operatoria. Entonces, esos tipos venían en bandada y la gente les indicaba. Frente a la casa, se ponían ahí, rompían la puerta y entraban...

Las redes clientelares son centrales también para entender la forma, el resultado y la recurrencia de las protestas en lugares como General Mosconi, Aguaray y Tartagal en la Provincia de Salta. Allí, una de las demandas centrales de los piqueteros era la intervención de los municipios porque, según los manifestantes, los intendentes distribuían los subsidios de empleo entre sus punteros políticos. Frente a las imágenes de manifestantes atacando edificios públicos y demandando la renuncia de sus representantes debemos contextualizar estas acciones en el conjunto de prácticas políticas dominantes y su impugnación por parte de quienes no forman parte de ellas. Al escuchar a una piquetera salteña decir que “nadie quiere a esos guanacos”, refiriéndose a los políticos locales, más que pensar en protestas “anti-políticas” habría que pensar en el significado de esta expresión en el contexto de un estado local cuya manera predominante de distribuir recursos es a través de redes partidarias.

Ver los procesos políticos particulares no solo los cambios macro-estructurales

CAPÍTULO 4

Procesos políticos

No podemos entender el surgimiento de la protesta con sólo mirar los cambios macro-estructurales o los indicadores de las condiciones de vida: el conflicto surge de procesos políticos particulares. En lo que sigue, voy a prestar atención a los campos de protesta en dos episodios específicos (el Santiagazo y el Correntinazo) para examinar la génesis política de la beligerancia.

Santiagazo: salarios y castigo

Lejos de ser un “estallido”, el Santiagazo fue el producto de una escalada en la beligerancia popular que comenzó a principios de 1993 (en enero de ese año se registraron tres marchas y concentraciones y en diciembre, más de treinta) y tuvo a los sindicatos docentes como uno de sus protagonistas. Una de las líderes del sindicato docente

(CISADEMS) resumió el proceso que desembocó en los eventos del 16 de diciembre. Nótese la importancia que el proceso de descentralización educativa y su articulación con mecanismos de cooptación política tienen en su relato:

El año 1993 es muy interesante para nosotros como sindicato docente, ya que fuimos una de las organizaciones más combativas en ese momento. No es casual. En ese año se concretaba la decisión política del gobierno nacional que significaba una transformación total del sistema educativo: la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias. Nosotros en ese momento nos oponíamos. Nuestro sindicato agrupaba justamente a las escuelas secundarias, terciarias y profesorados que serían transferidas en su totalidad como un paquete. Lógicamente, empezamos a organizarnos para resistir esa transferencia porque entendíamos que era una forma de desentenderse del Estado Nacional, de ir abandonando su rol en la educación y su obligación indelegable de sostenerla... En enero de 1993 estábamos en la calle siete u ocho personas con un megáfono y un cartel (risas). Algunas fotografías andan por ahí... y la crónica del diario dice que éramos un grupo insignificante de gente que nos apostamos en la puerta del mercado, en pleno centro, para denunciar que la transferencia de escuelas nacionales a la provincia iba a significar una gran pérdida de calidad educativa, porque la provincia manejaba toda la cuestión educativa de una manera político-partidaria y se distribuían los cargos docentes con criterios de clientelismo político, sin tener en cuenta la preparación del docente ni nada de eso. Denunciábamos que la provincia era absolutamente incapaz tanto en el aspecto econó-

mico-financiero como en el administrativo de recibir semejantes escuelas que históricamente habían estado más o menos bien administradas desde la Nación...

En los meses que precedieron a la "explosión" los manifestantes se enfrentaron con lo que el principal periódico de Santiago caracterizó como un "gobierno paralizado", con una administración inmovilizada por una "crisis institucional" sin precedentes, con un "vacío de poder". Dos meses antes del 16 de diciembre, el gobernador - víctima de feroces disputas internas en el Partido Justicialista y presionado por el gobierno nacional para que ejecute el ajuste fiscal- renunció, dejando su lugar al vice-gobernador. Durante dos meses, mientras trataba de forjar sin éxito una alianza con el caudillo local y ex-gobernador Juárez para designar a los miembros de su gabinete, el nuevo gobernador Fernando Lobo recibió fuertes presiones del gobierno nacional: a los efectos de obtener fondos para pagar a los cada vez más activos empleados públicos, el gobierno provincial debía promulgar una ley de ajuste conocida como Ley Ómnibus. Esta ley implicaba el despido masivo de empleados estatales contratados, la suspensión retroactiva de aumentos salariales desde febrero de 1993, la desregulación de un conjunto de actividades públicas y privadas, la descentralización de los servicios públicos y el apoyo decidido a las privatizaciones; en otras palabras, la ya conocida receta neoliberal. El mensaje del gobierno nacional era claro: ajuste o intervención federal. En esta situación el gobierno provincial tenía todo que perder y la única manera de calmar la creciente movilización de los empleados públicos en demanda de sus sala-

mos era —o eso era lo que el gobierno nacional proponía— el despido de cientos de ellos y la disminución de sus salarios; decisión que, como cualquier observador atento podía predecir, no pacificaría la protesta sino que la haría crecer a dimensiones impredecibles, como ocurrió cuando el Parlamento local finalmente aprobó la ley el 12 de noviembre.

Ley Omnibus
 Cuando los rumores acerca de la Ley Omnibus comenzaron a generalizarse, nueve gremios (Obras Sanitarias, Asociación Bancaria, CISADEMS, AMED, SADOP —maestros—, ASEJ —empleados del poder judicial—, ATAD y UOEM) formaron el Frente Gremial de Lucha para “unir todas las fuerzas de los trabajadores contra la ley”. En su documento inaugural el Frente culpaba a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo por la suerte de los empleados públicos y los ciudadanos en general, demandando la investigación y el castigo de los “responsables del caos económico y social”. Algunos días más tarde, el Frente convocó a una masiva marcha frente a la Casa de Gobierno y los Tribunales para obtener una entrevista con el gobernador y demandar “el castigo de los culpables del robo y la corrupción”. Estos son sólo algunos de los indicadores que apuntan a un hecho simple pero fundamental: quienes protestaban no sólo reclamaban sus salarios impagos y se oponían a los despidos masivos —esto es, no sólo estaban “luchando contra el ajuste”— sino que demandaban el final del nepotismo gubernamental. Como un grupo de curas católicos manifestó en su momento, se oponían al “uso poco claro del dinero público”.

En una suerte de diálogo público, los protagonistas de

la creciente ola de protesta se preguntaban por qué debían pagar el precio del ajuste mientras los funcionarios locales “se volvían ricos”. Durante 1993, los multimillonarios escándalos de corrupción fueron nota de tapa del principal diario local casi semanalmente. “Serias irregularidades” fueron denunciadas en la distribución de viviendas y tierras públicas. Los comedores infantiles en barrios pobres fueron también objeto de “oscuros arreglos” y fueron cerrados porque los fondos enviados por el gobierno nacional desaparecieron misteriosamente. Más de un millón de dólares se pagaron en obras públicas nunca ejecutadas y cientos de vehículos comprados por el estado provincial desaparecieron. El PAMI local estaba en crisis terminal presuntamente debida al vaciamiento ejecutado por un conocido funcionario. Días antes de la “explosión” los habitantes de Santiago se enteraron de que varios funcionarios y políticos locales estaban involucrados en el funcionamiento de un mercado de carne clandestino. Estos escándalos de corrupción eran públicamente admitidos —aunque no su responsabilidad individual— por funcionarios y políticos quienes, en los meses previos a diciembre, se acusaban mutuamente de “ladrones y corruptos”.

La corrupción generalizada es un elemento central en el análisis de esta protesta no sólo porque los protagonistas la ubicaron en el centro de sus demandas sino porque el “uso poco claro del dinero público” habla de la manera en que el ajuste fiscal es procesado a nivel local. Durante 1993, el gobierno nacional, siguiendo las “recomendaciones” del FMI y del Banco Mundial, insistió en la implementación del ajuste fiscal en las provincias, Santiago del

Estero entre ellas. A los efectos de disminuir el déficit fiscal, el gobierno nacional debía dejar de financiar administraciones provinciales sobredimensionadas e ineficientes (provincias "inviabiles", al etnocéntrico decir del entonces ministro Cavallo). Sin embargo, y a pesar de esta presión y de la amenaza de intervención federal, el gobierno nacional nunca cesó de enviar fondos al gobierno provincial. ¿La razón? En ese momento el presidente Menem estaba embarcado en su proyecto re-eleccionario y contaba con el apoyo de Santiago. Esto puede parecer parte del anecdotario político local, pero es crucial para entender cómo el ajuste se dirime a nivel local y cómo esto se relaciona con la protesta.

Algunos periodistas locales argumentan que, dado que la provincia nunca antes recibió tantos fondos del gobierno nacional, analizar la "explosión" de diciembre como producto del ajuste es un grave error, "porque no ha habido ningún ajuste en la Provincia de Santiago del Estero". El 16 de diciembre —argumentan— "el pueblo de Santiago" castigó a una clase política corrupta y carente de principios y de autoridad moral. Si bien este argumento pasa por alto el hecho de que la protesta se incrementó significativamente desde la Ley Ómnibus (en las tres semanas que separan la aprobación de esta ley del "estallido" final se da la mayor cantidad de marchas, demostraciones, cortes de tráfico y huelgas hasta llegar a treinta y dos en las dos primeras semanas de diciembre), apunta a un factor mediador fundamental en la ecuación simplificadora *ajuste = protesta*. El ritmo negociado del ajuste entre élites locales y nacionales y la forma de la acción colectiva popular se influyen mutuamente.

El gobierno nacional intentaba imponer ajustes presupuestarios sin alienar el apoyo del gobierno local. Este, a su vez, resistía el ajuste porque su implementación erosionaría su base de apoyo más segura: una bien aceitada maquinaria electoral cuyo recurso fundamental era la distribución de puestos públicos. La resistencia al ajuste se combinaba con la generalización y creciente publicidad del nepotismo, fundamentalmente mediante la apropiación de los fondos federales. Así, cuanto más nos acercamos al escenario del conflicto, más notamos que la corrupción gubernamental está en la raíz de la rebelión.

Mientras la corrupción se extendía entre los funcionarios, la "ostentación de una clase política privilegiada" — como varios periodistas escribieron luego del "estallido" — se volvía más notoria ("Ellos se compraban autos último modelo, importados, tiraban la plata. Iban a los clubes a la noche... champagne, minas, y todo eso", me contaba una activa participante de los hechos del 16) y el ajuste se tornaba más amenazador, *nuevos actores* se sumaron a la ola de protesta. Como se puede leer en los diarios del período previo al 16, muchos empleados públicos admitían frente a los periodistas lo "sorprendidos" que estaban al encontrarse marchando y gritando en las plazas públicas porque "es la primera vez en la historia de esta repartición que hay una manifestación". La semana anterior a los saqueos y las quemadas, en una resolución "sin precedentes en la historia del comercio en Santiago del Estero", la cámara de comercio decidió realizar una huelga en demanda de "una solución a la crisis económica y de medidas para reparar el orden moral". Negocios, supermercados,

dos y estaciones de servicio cerraron sus puertas por un día y organizaron un apagón como símbolo de protesta contra el gobierno (desde septiembre, las ventas habían sufrido una disminución de entre el 30% y el 90% y un número inusual de comercios había solicitado la quiebra). Monjas y curas católicos también se sumaron a la protesta en la plaza principal de Santiago ("eso llamaba mucho la atención porque era una cosa nueva en la política", me comentaba otro participante en las manifestaciones callejeras) ofreciendo sus mediaciones y expresando su solidaridad con un "pueblo inocente que, no teniendo ninguna responsabilidad en el uso poco claro del dinero público, es privado de su salario". *Nuevos actores y niveles de participación sin precedentes* son dos de las características definitorias de esta ola de beligerancia popular. Como recordaban otros dos protagonistas de los eventos del 16: "Gente que nunca antes iba a las asambleas aparecía... Eran las reuniones más grandes que se hayan visto".

En diciembre, la mayoría de los empleados públicos no había recibido su salario de los últimos tres meses (casi la mitad de los asalariados en la ciudad de Santiago son trabajadores del sector público), el estudiante promedio había asistido a sólo cincuenta días de clase por la huelga de maestros, muchas zonas de la ciudad carecían de agua potable porque algunos funcionarios presuntamente se habían apropiado de los fondos para comprar el cloro necesario para tratar el sistema de agua y cortes de electricidad afectaban a barrios enteros de la parte norte de la ciudad dejándolos sin luz ni agua. Participantes en la protesta me comentaron: "Era un caos terrible... esta ciudad

vive al ritmo de la administración pública. Si algo pasa ahí, lo sentimos todos". Esta disrupción de las rutinas y expectativas cotidianas afectaba a casi todos los residentes de la ciudad, incluidas las fuerzas policiales. En diciembre, éstas tenían sus salarios impagos con deudas de dos y tres meses. Y, además de impagos, estaban fracturadas por un fraccionalismo interno que había sido objeto de varias notas periodísticas. Un oficial de la policía me comentó: "No nos habían pagado en tres meses... no teníamos ni ropa, los uniformes estaban destruidos... Yo estaba con mucha bronca por la falta de capacidad y liderazgo de mis superiores... La política siempre estuvo metida en la fuerza; todos los ascensos se hacían por política". Una semana antes del 16 de diciembre, la policía decidió ir a la huelga, mientras los jefes hacían repetidos intentos por "levantar la moral" de la fuerza.

A principios de 1993, los manifestantes formulaban sus reclamos como empleados públicos de esta o aquella rama de la administración pública o como miembros de este o aquel sindicato (judiciales, maestras, jubilados, etc.). Las maestras se oponían a la transferencia de escuelas, reclamaban mejores salarios y su pago en término y mejoras en los establecimientos educativos. Los trabajadores de la salud pedían por sus salarios, su aguinaldo y recursos para sus hospitales. Los profesores universitarios exigían aumentos de sueldos y mejoras en las condiciones laborales. Hacia junio del mismo año aumentaba la frecuencia de las protestas organizadas por sus sindicatos, los cuales solían converger en marchas y actos en la plaza principal. Meses más tarde, si bien la protesta los encontraba juntos en las

calles, ésta todavía no surgía de un frente unificado. Sin embargo, en noviembre, el recientemente formado Frente de Lucha convocó a una acto masivo frente a la Casa de Gobierno y a los Tribunales para protestar contra la recientemente sancionada ley de ajuste y demandar el "castigo a los culpables del robo y la corrupción". Hacia fines de 1993, los manifestantes ya no se veían a sí mismos como miembros de este o aquel sindicato sino como parte del "pueblo del Santiago" que enfrentaba en las calles a los "gobernantes corruptos". Este es el colectivo que "estalló" en la mañana del 16, que no sólo reclamaba el pago de sus salarios sino también exigía "cárcel a los corruptos". Todos mis entrevistados, refiriéndose a los ataques a las casas de los políticos y funcionarios locales decían: "se lo merecen". Este simple comentario ilustra lo que "todo el mundo en Santiago sabe": que los ataques a los notables constituyen una retribución calculada. "Queríamos arreglar cuentas con los poderosos y los corruptos", me dice Carlos, quien estuvo presente en la quema de los tres edificios. María, del sindicato docente, agrega que "*el Santiagazo fue una lección para los políticos... todo tiene un límite*". Cerca de allí, pero pasados siete años del Santiagazo, un piquetero salteño se refería en casi los mismos términos a los efectos de la protesta. Luego de firmar un acuerdo que les concedía los Planes Trabajar solicitados aseguraba: "Hay cosas pendientes y esperamos que se cumplan; si no tendremos que volver a la ruta. *Esta fue una lección para los políticos*. Espero que de ahora en adelante sigamos en paz. Pero para eso hace falta trabajo."

Una foto publicada en el principal periódico de Santia-

go muestra a José —un hombre de cuarenta años, padre de tres hijos, empleado de la Dirección de Vialidad Provincial— portando la bandera argentina frente a la Casa de Gobierno en llamas. Al describir el sentimiento de los manifestantes, la manera en que estos se veían a sí mismos y el carácter relacional de su identidad colectiva, José encapsula buena parte del sentido que la protesta tuvo para sus protagonistas:

—¿Para qué querían entrar a la Casa de Gobierno? —le pregunté.

—Nosotros queríamos entrar para correr a todo el mundo, no queríamos que nadie quedara ahí. No queríamos que realmente nadie quede ahí, que quede grabado. Y así es que yo entré a la Casa de Gobierno... Mi objetivo era subir al despacho del gobernador y tomar la bandera.

—¿Para qué la querías?

—Tener la bandera es como haber dicho: "hemos ganado la guerra, el trofeo más valioso que podía existir..." Haber recuperado la bandera significaba algo glorioso para mí. Hemos ganado esta batalla, esta bandera es nuestra. Es decir: ¿cómo te podría explicar lo que uno siente cuando uno toma un símbolo así? Cuando vos ves una película de Estados Unidos, siempre hay una bandera. Fijate que en todas las películas siempre está la bandera de por medio: en un despacho, en una formación militar, en un buque siempre está la bandera. Y el hecho de tomar la bandera significaba haber ganado una guerra, porque para mí en ese momento era una guerra... Algún día la voy a enmarcar, la voy a poner en un marco, con pana de fondo y el más-

til abajo. La tengo escondida... es el símbolo de haber ganado una guerra. El santiagueño tomó la Casa de Gobierno y echó a un grupo de corruptos que manejaban en ese momento la vida del santiagueño.

—Dentro de diez años tu hijo te va a preguntar por la bandera, porque la vas a tener enmarcada...

—En ese momento, lo voy a sentar y le voy a contar lo mismo que te estoy contando a vos... (risas).

José no es el único que conserva un recuerdo del 16. A seis años de los eventos Osvaldo, un artesano y músico de unos cincuenta años, me describió su itinerario de ese día poniendo particular énfasis en los objetos que la gente sacaba de edificios públicos y residencias privadas. Sillones, mesas de comedor, alfombras, electrodomésticos, máquinas de escribir, ventiladores, acondicionadores de aire, estufas, bicicletas, computadoras, teléfonos, armas, aparatos de video, ropas de vestir. Esas eran las cosas que, según me contaba otro protagonista de los hechos, los manifestantes querían sacarles a “los tipos que habían expoliado al poder durante tantos años”. Los manifestantes tomaron esos objetos, o los “robaron” —como me dijo el juez encargado del arresto de 144 personas— y aún los conservan como “souvenirs de aquel día”. Cada uno de mis entrevistados guarda algún recuerdo de ese día: un cristal de la araña de la Casa de Gobierno, el apoyabrazos de la banca de un diputado, un diskette de los Tribunales.

Aquello a lo que las autoridades describen como “saqueo” u “objetos de incautación” los manifestantes lo definen como “recuerdos” o “souvenirs”. Muchos de estos

objetos, aun desprovistos de valor material, fueron tomados como “trofeos”. “Yo me llevé un souvenir del Congreso: dos manijas de puerta que todavía tengo, el apoyabrazos de una banca. Me los llevaba como recuerdos. También me llevé una patente de auto”, cuenta Carlos.

Cuando concluíamos nuestra conversación, Osvaldo se refirió implícitamente a su “trofeo” sintetizando gráficamente su posible significado: “¿Te imaginás lo lindo que es cagar en el inodoro de la Nina (esposa del Gobernador Juárez)?” Los manifestantes invadieron, saquearon y quemaron los “símbolos del poder y la corrupción”, según afirmaron varios entrevistados. No contentos con ello los despedazaron y llevaron a sus casas. Los restos de la protesta sirven para mantener viva la degradación simbólica de (y el desprecio por) las élites políticas dominantes.

La Plaza del Aguante Correntino

El 17 de diciembre de 1999, cientos de empleados públicos y estudiantes bloquearon durante casi una semana el puente General Belgrano. Cincuenta participantes del bloqueo y nueve gendarmes heridos, dos personas muertas y treinta y ocho detenidos fue el saldo del ataque de la Gendarmería Nacional a los manifestantes para despejar el puente.

¿Qué demandaban los manifestantes en Corrientes? Reclamaban el pago de salarios (con atrasos de hasta cinco meses), protestaban contra despidos en la administración pública, pedían “castigo a los responsables de la situación” y criticaban a viva voz al “clientelismo, los punteros

políticos, el caudillismo y la corrupción". Gritaban, en otras palabras, contra el nepotismo gubernamental generalizado y contra una manera persistente de hacer política en la provincia.

No era esta la primera vez que se bloqueaba el puente en señal de protesta, ni era la primera vez que los correntinos expresaban su descontento. Como el Santiagueño, esta protesta se había gestado durante varios meses. Desde marzo se había incrementado la frecuencia de las movilizaciones y el número de manifestantes. Como en Santiago, las maestras fueron las primeras en tomar las calles al inicio del calendario escolar demandando el aguinaldo adeudado desde diciembre. En abril, el sindicato de maestros lideró marchas masivas. En mayo se sumaron otros empleados públicos (judiciales y administrativos) y bloquearon el puente General Belgrano por primera vez en el año. Desde entonces, la protesta comenzó a generalizarse con marchas, cortes de calles, concentraciones en la plaza principal, huelgas (de empleados públicos, judiciales y docentes) y un autoacuartelamiento policial.

Las manifestaciones redoblaron su intensidad y se expandieron en escala, incluyendo cada vez a más empleados públicos, estudiantes y desempleados en medio del creciente fraccionalismo de las élites gobernantes. Desde abril fueron depuestos dos gobernadores en rápida sucesión y fue removido el intendente y caudillo local de la ciudad de Corrientes "Tato" Romero Feris, quien fue arrestado bajo cargos de apropiación y uso ilegal de fondos públicos. Ambos gobernadores y el intendente (los tres pertenecientes al Partido Nuevo, PANU) fueron desplaza-

dos por una coalición de partidos opositores (peronistas, radicales, autonomistas liberales) que acusaba al gobernador Braillard Pocard de liderar una administración fraudulenta e incompetente. Unas semanas después de la suspensión del gobernador, la Cámara de Diputados local decidió intervenir el municipio de Corrientes y destituir al intendente —y anterior gobernador, hoy preso— bajo cargos de corrupción administrativa (entre otras cosas, se lo acusaba de apropiarse de las donaciones realizadas a las víctimas de las inundaciones).

El gobernador Perié se enfrentó con la quiebra de la administración luego del monumental aumento de la deuda provincial contraída por el gobierno anterior. Entre 1993 y 1999 —presumiblemente los años del ajuste— el gasto público y la deuda crecieron de manera acelerada en la provincia (la deuda pasó de 561 a 1.400 millones de dólares). ¿De dónde provenía el dinero? Después de La Rioja, Corrientes fue la provincia más favorecida en términos de dinero recibido de los Aportes del Tesoro Nacional. Las razones de este "privilegio" —como en el caso de Santiago del Estero— fueron estrictamente políticas. La administración del PANU había sido una incondicional aliada del presidente Menem (algunos analistas sostienen que la misma creación del PANU luego de una división del Partido Autonomista Liberal fue una maquinación del menemismo). Esos fondos fueron a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos y sirvieron para financiar la desorbitante expansión del empleo público (si bien los números son materia de disputa, varias fuentes sostienen que la municipalidad incrementó su planta de 2.000 a 7.000 empleados en unos

pocos años). Indudablemente, el incremento del empleo público fue la forma en que los gobiernos provinciales lidiaron con el aumento del desempleo causado por la devastación de las economías regionales (se calcula que en la provincia de Corrientes la tasa de desempleo, de no ser por el empleo público, ascendería al 25,7% de la PEA, siendo la tasa actual del 12,9%). Pero el empleo público es también una manera para el gobierno provincial de crear y mantener su maquinaria clientelista. Como el PJ en Santiago del Estero, el PANU en Corrientes hizo un uso discrecional del empleo público con fines electorales.

La nueva coalición en el gobierno enfrentó tres desafíos diferentes aunque relacionados. El primero provenía del PANU. Otro, del gobierno nacional que amenazaba con la intervención federal. Y el tercero eran los miles de empleados públicos que desde el 7 de junio acampaban en la plaza principal de la ciudad de Corrientes, rebautizada "Plaza del Aguante y la Dignidad".

El PANU no abandonó los gobiernos provincial y municipal pacíficamente. Al aumentar las disputas entre el partido de gobierno y la coalición opositora crecieron los enfrentamientos entre militantes de ambos lados. El 11 de junio, días antes de la remoción del gobernador del PANU, dos militantes del partido fueron baleados. Ese día, seguidores del PANU ocuparon la Legislatura durante 48 horas protestando contra la expulsión de Braillard. El nuevo gobernador Perié asumió el 3 de julio en medio de ataques a las oficinas de los partidos de la coalición presuntamente a cargo de militantes del PANU (en ellos, la oficina del Partido Radical fue totalmente destruida por el fuego). Días

más tarde, un concejal del Partido Liberal y activo participante en la protesta contra el PANU fue atacado en la puerta de su casa sin sufrir heridas; se presume que este ataque también fue realizado por activistas del PANU. El 7 de julio, manos anónimas intentaron incendiar la casa del presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Radical. Miembros del PANU fueron también víctimas de ataques. Trescientos manifestantes asaltaron la estación de radio y la residencia de un periodista local adepto a "Tato" Romero Feris acusándolo de "mercenario del aire". Sus guardaespaldas respondieron al ataque baleando a la multitud, sin causar heridos. "Tato" amenazó repetidas veces con movilizar a sus seguidores contra el nuevo gobierno argumentando: "no puedo contener a mi gente". Algunos días después de ser depuesto admitió ante periodistas que miembros de su partido habían tratado de resistir su desalojo del edificio municipal: "Intentaron mantenerlo bajo nuestro control... yo me opuse a esta resistencia pero si esto sigue así va a llegar un momento en que... esto va a terminar en un estallido, estamos al borde de un estallido... Si prendemos una chispa, esto va a terminar en un enfrentamiento armado entre nuestros hermanos". Un mes más tarde, cuando ya era claro que sería arrestado bajo cargos de corrupción, "Tato" reiteraba sus amenazas: "Si me arrestan no voy a controlar a los militantes del PANU; yo no soy responsable de lo que hagan". Se refería a los ataques a las oficinas y a las personas por las que esos activistas eran ya muy conocidos en la ciudad.

Con el gobierno provincial en quiebra y en medio de la escalada de protesta y violencia, el gobierno nacional co-

menzó a considerar la intervención federal. A fin de evitar su reemplazo por funcionarios federales y recibir los fondos necesarios para pagar a los beligerantes empleados públicos, el nuevo gobierno fue forzado a implementar un “duro ajuste” que consistía en un extenso programa de reducción de gastos y privatizaciones, incluyendo las ventas del banco provincial y de la compañía de energía. El ajuste, de acuerdo al mandato nacional, debía concentrarse en la Municipalidad de Corrientes, la cual tenía un exceso de aproximadamente 5.000 empleados. Como sostuvo el nuevo gobernador, admitiendo implícitamente la vinculación entre clientelismo y empleo público: “La Municipalidad de Corrientes tiene 7.000 empleados, cuando nunca tuvo más de 2.000... Esto es un disparate. Tenemos que reducir el número de miembros del PANU que fueron contratados con fondos públicos”. Así, como en Santiago seis años antes, el nuevo gobierno se enfrentaba a una situación en la que tenía todo que perder: ajuste —que significaba más protesta— o intervención. Y, como en Santiago, el gobierno federal dudaba en realizar la intervención —la cual hubiera evitado la “explosión” final— por razones estrictamente políticas. El 12 de junio, funcionarios de la administración nacional sostenían: “No tenemos interés en comprar este desastre a cinco meses de dejar el gobierno”. Cuando la nueva administración de la Alianza asumió el gobierno las dudas continuaron; dado que había que “ajustar”, el gobierno nacional prefería no ser responsable de sus “costos políticos”.

No es una reconstrucción posterior a los episodios la probabilidad de que tal “explosión” final ocurriera. Desde

el 7 de junio, cerca de doscientas carpas ocupaban la plaza frente a la Legislatura. Las primeras carpas fueron levantadas por los maestros. Una semana más tarde no quedaba lugar en la plaza; trabajadores del interior de la provincia ocuparon los últimos lugares vacantes. Abogados, choferes de buses escolares, trabajadores municipales, maestras jardineras, empleados judiciales, trabajadores de sanidad y hasta familiares de agentes de la policía provincial tenían sus carpas. Bajo el nombre de “autoconvocados”, fracciones disidentes de varios sindicatos se unieron a la protesta. Los manifestantes hablaban de “recuperar las instituciones, la libertad y la justicia”, describían a la administración gubernamental como un “monumento a la corrupción”, organizaban sus marchas cantando “¡esto no es pagado, esto no es pagado!” para diferenciarse de una manera de movilización política a la que criticaban como clientelar, al tiempo que una demarcación entre “nosotros, el pueblo” y “ellos, los gobernantes y los políticos” adquiría, con el transcurso de los días en la plaza, mayor nitidez. El mejor resumen que encontré sobre las demandas de los *placeros* proviene del título de uno de estos volantes distribuidos en la plaza: *Aguanta. Hoja del Pueblo Correntino Autoconvocado*. El título dice: “¿Salarios o justicia?”, y al pie de página se lee: “Salarios y justicia”.

Contrariamente a lo que se esperaba, el nuevo gobierno provincial no condenó las acciones de los manifestantes. Miembros de la coalición gobernante que destituyó al PANU reconocieron en repetidas oportunidades la importancia de los *placeros* (quienes siguieron las sesiones de la Legislatura por los altoparlantes que transmitían los even-

tos en la plaza) en la remoción del gobernador y del intendente. Como un miembro de la coalición afirmó: "La gente en la plaza nos dio fuerza (para desplazar al gobernador)". Ese mismo día, el nuevo gobernador admitía que tenían que obtener fondos del gobierno federal en forma apresurada "porque la Plaza del Aguante y la Dignidad no nos va a dar mucho tiempo para que encontremos una solución... Si no encontramos una solución, el apoyo de la gente va a durar sólo unas horas". En otra entrevista, el nuevo gobernador reconocía la relevancia de la protesta: "En Corrientes nunca hubo una manifestación popular tan importante. La protesta fue capaz de destituir a "Tato" Romero Feris... no podemos traicionar su confianza... la gente de la plaza sabe que yo no soy un mago. Y si tuvieron tanta paciencia con "Tato" tienen que tener un poco de paciencia conmigo". Un mes más tarde, cuando las maestras decidieron continuar su huelga, el nuevo gobernador afirmaba: "Cuando recibamos más fondos vamos a pagar los salarios. Respetamos la decisión de los maestros de seguir con su protesta hasta que reciban sus salarios". Cuando una delegación de la Plaza del Aguante marchó a Buenos Aires con la intención de acampar en la Plaza de Mayo, el gobernador Perri se identificó con ellos diciendo que "los correntinos estamos a punto de perder la paciencia... si no recibimos una solución, el pueblo de Corrientes sabrá que hacer". Estos son algunos de los episodios que demuestran la *validación* del "aguante" por parte de los funcionarios del gobierno. Validación o certificación que provenía también de otro importante actor en la política local: la Iglesia Católica. En repetidas oportunidades, las autoridades eclesióásticas reconocieron la legitimidad de las demandas y la

"lucha" de los manifestantes. Como afirmó un cura frente a la multitud reunida en la plaza: "Señor, nuestro pueblo pide por la fuerza necesaria para mantener su dignidad".

Por su parte, miembros del PANU —y en especial su líder "Tato" Romero Feris— desacreditaban constantemente a los manifestantes como "falsos representantes de la voluntad popular" manipulados por intereses externos a la provincia. A menos de una semana de comenzado el campamento en la Plaza 25 de Mayo, el entonces intendente se refirió a ellos como militantes de partidos políticos traídos del interior de la provincia y de otras provincias. Argumentando que eran menos de los que los medios afirmaban repetía las acusaciones que las élites —como vimos— han sostenido en más de una oportunidad durante esta última década: esto era el producto de agitadores externos. "Tato" declaraba en una entrevista: "Esta es gente de Quebracho, de Patria Libre y de otros grupos de izquierda. Son los mismos que andan dando vueltas por la ciudad como vándalos, creando una falsa sensación de caos".

Hacia mediados de diciembre, la ciudad de Corrientes estaba "prácticamente aislada" por el bloqueo del puente General Belgrano. Miles de manifestantes tuvieron repetidos enfrentamientos con la gendarmería durante los seis días que duró el bloqueo. Los negocios estaban cerrados por temor a los saqueos y por el desabastecimiento. Prácticamente no hubieron clases durante el año, la mayoría de los empleados públicos (incluida la policía, dividida entre aquellos que permanecían leales a "Tato" y quienes apoyaban al nuevo gobierno) estaban en huelga y muchos servicios sociales (como los comedores infantiles)

estaban suspendidos. En otras palabras, la vida cotidiana era un completo desorden dado que, como en Santiago, la ciudad vivía "al ritmo de la administración pública" (las ventas comerciales habían disminuido 80% en unos pocos meses).

El caudillo más importante de la provincia, "Tato" Romero Feris, estaba bajo arresto en una clínica local. Hacia mediados del mes, luego de la rápida sucesión de tres gobernadores en seis meses, la provincia tenía de facto dos gobernadores: uno elegido por la nueva legislatura (en octubre el PANU ganó las elecciones provinciales y pudo revertir la destitución de Braillard, quien intentó entrar a la Casa de Gobierno liderando una marcha de 2.000 seguidores) y otro apoyado por la coalición. Después de que el gobierno nacional se decidiera finalmente por la intervención federal, la gendarmería reprimió brutalmente a los miles de manifestantes que bloqueaban el puente.

"El Tata" y "El Tato"

Corrientes y Santiago son conocidas como tierras de caudillos. "El Tata" Juárez fue gobernador de Santiago por primera vez en 1949; en 1999, a los ochenta años, se convirtió en gobernador por quinta vez. "El Tato" Romero Feris fue gobernador de 1993 a 1997 e intendente de la capital de 1997 a 1999; miembro de una familia que controló la política provincial durante décadas, es aún el caudillo local más importante. "El Tata" y "El Tato" dominan la política en provincias que han sido retratadas estereotípicamente como tranquilas y dóciles. Los "estallidos" —se dijo reproduciendo lugares comunes— violaron la

"proverbial calma" de los correntinos y la "mansedumbre santiagueña".

En la raíz de ambos episodios de violencia colectiva, sin embargo, hay algo más que superficiales similitudes: podemos localizar un conjunto de mecanismos y procesos análogos que producen estos particulares resultados. Ambas "explosiones" son el resultado de largos procesos que comienzan con el fracaso de las autoridades en el cumplimiento de compromisos como el pago de los salarios a sus empleados. Esta *decreciente capacidad* pone a los primeros manifestantes en las calles (en ambos casos, los maestros). Luego se da una *escalada* en la frecuencia, tamaño y violencia de la protesta (de reuniones en las calles y marchas a intentos de ocupación de los edificios públicos, bloqueo de puentes y calles e invasión, saqueo y quema de residencias privadas y edificios públicos) mientras *nuevos actores* se suman al lado de los manifestantes. Estos nuevos actores incluyen a dirigentes sindicales y militantes de partidos y a otros actores que normalmente son moderados, como abogados, médicos, comerciantes y empleados públicos, quienes afirmaban frente a los medios de comunicación: "estamos haciendo esto por primera vez en la vida". Un activo participante en el Santiagazo me dijo: "Esas eran las reuniones más grandes a las que haya ido... gente que nunca antes iba a las asambleas aparecía por primera vez". Estos nuevos actores también incluían a *facciones disidentes* de los gremios que rechazaban los liderazgos establecidos (en ambos casos bajo el nombre de "autoconvocados"). Y eran legitimados en su protesta por la *validación* de las autoridades, funcionarios del go-

hacerse una
reconstrucción de
cómo se "hizo"
A medida que
se va...

*Campo
de protesta*

bierno (más en Corrientes que en Santiago, donde los manifestantes se enfrentaron a lo que uno de ellos describió como un “muro de silencio”) y la Iglesia Católica.

A medida que los nuevos actores se sumaban a la protesta, unos *liderazgos se consolidaban* y otros *nuevos emergían* en un esfuerzo por formar una coalición de todos los actores de la protesta. El Frente de Lucha fue el resultado de estos esfuerzos de intermediación en Santiago. La Plaza del Aguante y la Dignidad se convirtió en la manifestación espacial de esos esfuerzos en Corrientes. Al converger en un solo frente, *el espacio político entre los manifestantes y los objetos de sus reclamos se profundizó*. En ambos casos, al aumentar la movilización callejera se volvió cada vez más difícil no tomar partido por alguno de los dos —y sólo dos— polos del conflicto: se estaba con los empleados públicos o con el gobierno. En otras palabras, al aumentar y solidificarse los lazos entre los manifestantes, el espacio entre ellos y el gobierno se volvió más amplio y un límite delineando un *nosotros* versus un *ellos* comenzó a tomar forma. Surge entonces un *nuevo actor colectivo*: lo que comenzaron maestros, judiciales, empleados del transporte, etc. reclamando por sus salarios se transformó en diciembre en “el pueblo” contra “la clase política”.

La corrupción gubernamental, en ambos casos, alimentó la creación de esta *línea divisoria* entre nosotros y ellos y sumó resentimiento a la desesperación que los manifestantes sentían por el no pago de sus salarios. El nepotismo público demostró a los manifestantes que el gobierno no sólo no podía cumplir sus compromisos sino que sus funcionarios no tenían voluntad de hacerlo. En ambas ciuda-

des la desesperación trascendió a los empleados públicos. En localidades con altísimos porcentajes de empleados públicos, en las que se vive “al ritmo de la administración pública”, la falta de pago está destinada a afectar a la mayoría de sus habitantes. Tanto en Corrientes como en Santiago no hubieron clases durante meses y el funcionamiento de los servicios sociales básicos estaba interrumpido. Como me explicó una mujer en Santiago, en los días previos al 16 de diciembre reinaba un “caos terrible”. La *disrupción de la vida diaria* y la *amenaza a rutinas cotidianas* figuran de manera prominente en los relatos de los manifestantes en los meses que preceden a las “explosiones” finales.

Cierto es que en ambos casos se trata de empleados públicos reclamando por el pago de sus salarios. Pero la escalada y el “estallido” final no pueden ser analizados sólo en términos de demandas. La protesta floreció gracias a una apertura provista por la relativa debilidad y divisiones internas de los gobiernos provinciales; debilidades y divisiones que en ambos casos llegaron a los organismos de control y represión (las fuerzas policiales). En otras palabras, en Corrientes y en Santiago vemos la forma en que las crisis gubernamentales actúan como *ventanas de oportunidad* frente a las cuales los manifestantes responden. Los manifestantes hicieron algo llamativamente nuevo como quemar tres edificios públicos y una docena de residencias privadas, acampar por casi seis meses frente a la Legislatura local y bloquear un importantísimo puente. Sin embargo, lo hicieron en el contexto de los procesos relacionales que acabo de describir. Esos “días de furia” tuvieron lugar en circunstancias caracterizadas por severas

rupturas de lo cotidiano. Y se dieron dentro del contexto de un *campo de protesta* caracterizado por gobiernos crecientemente incapacitados, por el ensanchamiento del espacio político que vinculaba a funcionarios y manifestantes, por los esfuerzos de intermediación entre estos últimos y por la resultante constitución de un nuevo -aunque fugaz- actor político.

CAPÍTULO 5

Identidades insurgentes

Así como la emergencia y el curso de la protesta no se desprende de su contexto estructural, tampoco su sentido, el significado que sus protagonistas le dan a sus acciones beligerantes, puede leerse directamente de la apremiante necesidad económica (de la falta de pago a los empleados públicos a la falta de empleo de miles de desocupados) que la enmarca. Si escuchamos más de cerca de los manifestantes en Salta, Cutral-có, Plaza de Mayo o el puente General Belgrano detectaremos la existencia de una directa impugnación a la llamada "clase política" como sentido omnipresente en las acciones de los manifestantes.

Seis días en el Sur: la pueblada

"Hay un niño a la intemperie, en la ruta 22, mirando con inocencia lo que no puede

entender. Una piedra como un juguete, ese humo no es de su tren. No se juega hoy en la esquina del taller. Hay un niño que porta esperas en la ruta 22, no habrá de decir palabra, hablará por él el dolor. Hoy no escribirá su nombre en el pizarrón. Hoy no tomará su leche en el comedor. Y no escuchará a su padre salir temprano a trabajar, hoy un niño se fue a la ruta y se sentó, en el medio, a esperar."

Sergio García, *Bajo el cielo un niño*

"Che, esto no es joda, acá hay gente bien vestida", dijo un gendarme cuando, arrasada la primera barricada o *piquete* con gases lacrimógenos, balas de goma y agua lanzada desde un camión hidrante vio que veinte mil personas esperaban a los menos de doscientos gendarmes en la Torre Uno de Plaza Huincul, Provincia de Neuquén, el 25 de junio de 1996. Quizás sin saberlo el gendarme estaba haciendo una observación sociológica sobre la composición de la multitud que reclamaba trabajo y la presencia del entonces gobernador neuquino Felipe Sapag. La multitud que había bloqueado el acceso a Plaza Huincul y Cutral-có durante cinco días incluía a "gente bien vestida" y no sólo a pobres y desocupados. Y, por tanto, "no era joda". Era una protesta que excedía la capacidad represiva de la gendarmería, no sólo por el número sino por la diversidad del *objetivo*. Esta heterogénea multitud esperaba a la gendarmería entonando el Himno Nacional, cantando: "¿Si este no es el pueblo, el pueblo dónde está?", vivando a Cutral-có y Plaza Huincul y gritando: "¡Que venga Sapag!" La jueza federal que comandaba el pelotón de gendarmería con la orden de despejar la ruta pidió hablar con represen-

tantes de esas veinte mil almas. En medio de la ruta los habitantes de Cutral-có y Plaza Huincul le espetaron: "Acá no hay representantes, acá está el pueblo... venga a hablar con el pueblo." A cuatro años de la protesta Laura, portavoz de la comisión de piqueteros, afirma: "Decir que esa fue una protesta de desocupados o de los excluidos es hacer una mala lectura. Ahí estaba todo el pueblo." La evaluación de Laura fue y es compartida por muchos habitantes de Cutral-có y Plaza Huincul; durante los días de la protesta, los habitantes de ambas localidades repitieron frente a las cámaras: "Nosotros queremos laburar. ¡Les damos la luz, el gas, el petróleo y nos pagan así! ¡Que venga Felipe! ¡Somos 30.000, no 5.000; está todo el pueblo! ¡Acá no hay políticos, acá está el pueblo!"

Esta multitud-en-la-ruta se definía como *unida* ("Todo el pueblo está acá"), *numerosa* ("Somos 30.000, no 5.000"), *comprometida* con un objetivo ("Queremos trabajo, queremos que venga Sapag a darnos una solución"), *valiosa* ("Les damos la nafta, el gas, la electricidad...") y *carente de líderes* ("Acá no hay políticos"). Tanto en las maneras de llamarse a sí misma como en su composición social, tanto en su discurso como en sus relaciones sociales, los manifestantes construyeron una identidad participativa que giraba alrededor de la noción de "pueblo".

Esta identidad insurgente, sin embargo, no nacía de la nada, ni de un sustrato siempre presente dispuesto a activarse frente a una situación objetivamente injusta (como si tal cosa existiese); era, por el contrario, una construcción colectiva y conflictiva. Durante siete días y seis noches en la ruta los manifestantes realizaron incesantes esfuerzos

por definirse a sí mismos diciendo quiénes eran y quiénes *no* eran. En las afirmaciones de Laura y de muchos otros piqueteros, el término “pueblo” adquiría dos connotaciones diferentes. Por un lado, “pueblo” refería a la localidad, a las ciudades de Cutral-có y Plaza Huincul. Las repetidas referencias a “todo el pueblo” apuntaban, en parte, al hecho de que buena parte de los habitantes de ambas ciudades estaba en la ruta. Y estaban en la ruta para que el gobernador y “todo el país” reconocieran el proceso de extinción por el que rápidamente atravesaban luego de la privatización de YPF. En las representaciones de los habitantes este es un pueblo muy especial porque provee de energía (gas y petróleo) al resto del país. Como gritaba un piquetero a metros de los amenazantes gendarmes: “Les damos el gas, la nafta, la electricidad... ¿Y nos pagan así?” El piquetero se refería de esta manera al pueblo-como-localidad, una significación que está profundamente enraizada en las creencias comunes de los habitantes de la región. Entre cutralquenses y huinculenses existe una creencia generalizada —enraizada, a su vez, en una pertinaz retórica nacionalista que describe a los habitantes como “dueños” del petróleo de la región— de que los recursos minerales de YPF les pertenecen. La frase: “*Nosotros* les damos el gas, *nosotros* les...” no era, pues, una expresión idiosincrática de este piquetero; repetida durante la protesta reflejaba un conjunto de creencias compartidas. En otras palabras, los entendimientos mutuos, las identidades colectivas que se forjaron en la ruta durante esos días encuentran sus raíces —sus bases materiales— no sólo en la situación reciente de Cutral-có y Plaza Huincul como ciudades en peligro de extinción, sino en las memorias de los

“tiempos de oro” de YPF y en una convicción compartida sobre la propiedad de los recursos naturales. Así, las memorias colectivas sobre el funcionamiento de un estado de semi-bienestar durante el tiempo de YPF otorgaron una suerte de ímpetu solidario para la organización colectiva y la defensa de los que eran considerados intereses de la ciudad. Este *nosotros* colectivo tenía dos preocupaciones fundamentales: la falta de oportunidades y trabajo y los riesgos que ésta implicaba para la supervivencia de ambas comunidades. Como afirmaba Mónica: “Yo amo este lugar, este paisaje. ¿Por qué me tengo que ir? ¡No! Si yo armé mi familia acá, en Cutral-có. Me dio posibilidades este paisaje. La plaza fue testigo de mis encuentros con el padre de mi hijo... hay muchas cosas. Este Cutral-có le dio la posibilidad de nacer [...] A mí me costó mucho tener mi casa. ¿Por qué me tengo que ir? La pueblada fue sobre eso.” O como sintetizaba Zulma: “Nosotros queríamos fuente de trabajo... queríamos que se terminara con esto de que no teníamos nada, que estábamos muy alejados del gobierno, que el gobierno no respondía, que no teníamos nada para que los chicos siguieran estudiando, *que esto se iba al carajo sin retorno*. Eso reclamábamos”.

Existía, sin embargo, otra connotación importante del término “pueblo” implícita en el rugir de la multitud. Los manifestantes construyeron su identidad colectiva y sus demandas en términos democráticos contra lo que ellos percibían como oscuras negociaciones de los políticos y sus constantes intentos de “usar al pueblo”. Desde el punto de vista piquetero, quiénes eran los manifestantes y por qué estaban en la ruta tenía tanto que ver con la devasta-

ción provocada por la retirada del estado expresada en la privatización de la empresa petrolera estatal como con la ruina producida por las acciones interesadas de los políticos. Una perspectiva sensible a las palabras y las acciones de la multitud, a las demandas y a las creencias compartidas nos alerta sobre el actor principal *en oposición al cual* los piqueteros construyeron su identidad: la “clase política”. En términos de Laura: “Las personas que están al mando... las personas que dicen que más adelante voy a hacer esto, si me votan, voy a hacer aquello”. Sin sus representantes habituales –o, mejor dicho, a pesar de ellos– los manifestantes podían hacer oír su voz de descontento por el rápido deterioro de ambas comunidades y darlo a conocer al resto del país. “Por una vez –repetían Laura y muchos otros piqueteros una y otra vez– los políticos no nos pudieron usar”.

En búsqueda de visibilidad

No hay mejor lugar para observar *in situ* la formación de la manera en que los piqueteros se veían a sí mismos y a las autoridades y la identidad colectiva piquetera que el cuaderno que Laura Padilla, vocera de los manifestantes durante una semana y firmante del acta de acuerdo con el gobernador Sapag que puso fin a la protesta, llevaba consigo durante los días de la protesta, tomando notas en las reuniones que tenían los manifestantes durante días y noches en la ruta. El cuaderno mencionaba varias de las tareas organizativas (“identificar vehículos con obleas”, “que se convoque al colegio de abogados”, “máquinas para tapar picadas”, “los jubilados se encargan de la comida”) a

las que los piqueteros dedicaron buena parte de su tiempo en la ruta. Así describía Laura su piquete: “Estábamos muy organizados. Las mujeres eran las coordinadoras, cuidaban a los chicos, distribuían la comida que traía el centro de jubilados. Cinco o seis veces al día, en un jeep que teníamos, llevábamos comida, mensajes, cubiertas a los otros subpiquetes”.

En una de las páginas del cuaderno se leen los teléfonos de radios y canales de televisión nacionales y una frase: “usar los medios de comunicación”. Laura me explicó: “Utilizar los medios para que alguien nos preste atención”. Sus anotaciones y comentarios demuestran lo mucho que los manifestantes apreciaban el papel que los medios podían jugar en darle a la manifestación visibilidad más allá de los límites de ambas ciudades e, incluso, más allá de los confines de la provincia. En las reflexiones de Laura, sin embargo, la preocupación por la visibilidad no manifestaba solamente una necesidad estratégica. Era también expresión del carácter dialógico de la identidad colectiva que los piqueteros estaban defendiendo: si ellos, con la ayuda de los medios, eran tomados en cuenta, su imagen colectiva cambiaría a los ojos del destinatario principal de sus reclamos: el gobernador Sapag.

“Porque lo que nos estaba pasando era totalmente desconocido. Nos estaba pasando algo ahí en el pueblo. Pero al no darse difusión, no pasaba nada... Nosotros tentamos miedo que ellos jugaran con el cansancio nuestro. Si nadie nos daba bola y nos dejaban en ese abandono que nos estaban dejando, nadie nos daba bola... iba a llegar un momento que nos íbamos a tener que ir por capsan-

cio, porque nos íbamos a empezar a caer. Pero el desgaste físico... eso ya se había empezado a sentir. Los diarios locales nos daban bola hasta ahí nomás. ¿Quién se iba a enterar de que nosotros estábamos presionando a un gobernador para que fuera al pueblo? Sin los medios nacionales ésta era una protesta local, nada más [...] *Nosotros pensábamos: 'si alguien nos presta atención, el gobernador se va a dar cuenta que no somos delincuentes. Se va a dar cuenta que acá está todo el pueblo'* (mi subrayado)".

Los programas de televisión y radio, las notas en los periódicos mientras ocurría la protesta y —años más tarde— mis entrevistas dan cuenta de esta necesidad de ser escuchados. En momentos en que ambas comunidades eran percibidas en proceso de convertirse en "pueblos fantasmas", el énfasis que la multitud ponía en "que nos presten atención" y en "ser vistos por el gobernador en persona" puede ser leído como un grito en contra de un proceso de invisibilización, en contra de la amenaza de desaparición. Marcelo, otro piquetero, dice: "Cortamos la ruta porque era la única manera que nos escuchan". Rubén, también piquetero, afirma: "La gente quería que [el gobernador] viera y sintiera en carne propia que no eran cinco sediciosos, un grupo de gente a los que él llamó delincuentes, que estaban protestando porque había un entorno político sino que realmente supiera que la gente, mucha que lo votó a él, estaba en disconformidad con las mentiras y muchas otras cosas". Mary, quien estuvo día y noche en Añelo, lo dice claramente cuando recuerda con lágrimas en los ojos: "Mi hijo me preguntaba por qué estábamos en la ruta. Y yo le decía: 'Mirá hijo, porque este pueblo necesita ser

escuchado, necesita que la gente se dé cuenta de lo que está perdiendo, de lo que el gobierno ya le quitó y le quiere seguir quitando'. Yo lo entendí así, yo lo viví así". Escuchando a Rubén, Mary o Mónica ("no nos vamos a mover de la ruta porque estamos acá, en Cutrál-có, para quedarnos..."), "¿por qué me tengo que ir si amo este lugar, si crecí acá?") y a tantos otros me arriesgaría a decir que el mundo social creado alrededor del ser-en-la-ruta les otorgó a los manifestantes, durante siete días, aquello de lo que más carecían como habitantes de un lugar en peligro de extinción: una justificación para existir.

"Es la única manera de hacer que nos escuchan", dice lejos de allí, uno de los líderes de la protesta de junio de 2001 en Salta. Y agrega: "Es la única que nos queda, hermano. Si no salimos a protestar a la ruta nadie nos escucha. De todos modos, se ríen de nosotros y nos prometen cosas que saben no van a poder cumplir", sintetizando lo que quienes levantan las barricadas en las rutas argentinas procuran lograr. Estar-y-ser-en-la-ruta los rescata del olvido y les ofrece la posibilidad de combatir (y emerger de) la indiferencia oficial.

¿Quién es, entonces, ese *nosotros* que quiere ser visto y reconocido? El cuaderno de Laura nos ofrece una ventana hacia los esfuerzos auto-definitorios de los piqueteros. Estas son las frases que ella anotó en una de sus páginas y que constituyeron la base de sus apariciones públicas en radio y televisión. Breves como son, sintetizan los reclamos y las imágenes que de sí mismos tenían los piqueteros. Las referencias a un golpe de estado, a la ausencia de armas y a la ciudadanía pueden ser leídas como una res-

puesta a las palabras del gobernador y otros funcionarios nacionales que agitaban el fantasma de una asonada para descalificar a los manifestantes:

"50.000 habitantes. No, golpe de estado [...] antes de privatizar, no preparan al pueblo. La tierra más rica y la gente más pobre. Un pueblo desarmado. 20.000 personas. Piqueteros-ciudadanos. Desocupación... 4.100 desocupados... alegría, pueblo unido. Expulsada del sistema económico [...] Los representantes de los piquetes informamos al pueblo: que nos seguimos reuniendo, que estamos más firmes que nunca. Y que el señor gobernador ya tiene un pueblo demostrando que está muy unido y que no cede, que quiere el diálogo."

CONCLUSIONES

Mucho se ha escrito durante los últimos años sobre la beligerancia popular en el país, pero es poco lo que se ha investigado. Hay quienes aún siguen viendo en la acción colectiva de los manifestantes a una multitud enardecida, casi irracional, que sólo se calma con una bolsa de comida o con un subsidio de empleo; una muchedumbre hambrienta capaz de todo, gente pura y simplemente harta que sale como loca a cortar calles o rutas. Y que a veces se excede y prende fuego algún edificio público como en Santiago del Estero, Salta o Jujuy. Hay otros, desde posiciones ideológicas opuestas, que ven en cada protesta, en cada corte, en cada ataque a un edificio público un indicador del surgimiento de una suerte de Gran Movimiento contra el ajuste, el neoliberalismo o el capitalismo. El piquetero es la imagen inversa del manifestante desesperado: es un sujeto de voluntad inquebrantable y racional. Curiosamente, ambas posiciones siguen dominando las

discusiones a expensas de los escasos análisis fundados en la investigación empírica. Son pocos los que se han tomado el trabajo de mirar de cerca a los manifestantes y a sus formas de acción sin imponer sentidos que tienen más que ver con lo que ellos quisieran ver que con lo que realmente está sucediendo.

Durante bastante tiempo, periodistas y académicos hablaban de la poca oposición que el "modelo" económico suscitaba, sin registrar lo que cualquier observador atento a la dinámica beligerante en el llamado "interior" podía ver: un ciclo de alta movilización popular con innovaciones importantes en las formas y en los sentidos de la acción colectiva. Puede que la efectividad de la protesta sea mayor si "golpea a las puertas de la capital", pero esa no es excusa para no observarla con detenimiento cuando ocurre en algún remoto rincón del país y sólo es vista por televisión. Únicamente mirando más de cerca y más allá de los estrechos límites de los escenarios centrales del poder podremos entender las transformaciones en la acción colectiva.

En *La Caverna*, su última novela, José Saramago describe con una riqueza de detalle que nos recuerda los textos del historiador inglés E. P. Thompson la extinción del mundo de los artesanos centrándose en las maneras en las que una familia de alfareros vive este proceso; una familia que lenta y dolorosamente se da cuenta de su inutilidad en este mundo de modernas tecnologías y renovados gustos estéticos. Esta familiaridad que Saramago manifiesta con los marcos de sentido en los que Cipriano y su hija Marta experimentan la amenaza que pesa sobre sus vidas es lo que necesitamos para entender la protesta vivida y la

manera en que ésta es experimentada por quienes entran a una ardiente Casa de Gobierno en búsqueda de la bandera argentina, agitan el apoyabrazos de una banca de diputado frente a una legislatura provincial, pasan fríos días y noches en las barricadas en las rutas o acámpan en una plaza. Excavar y examinar lo que los manifestantes creen que son, lo que creen que están haciendo y con qué fines creen que lo hacen es crucial para evitar reproducir los argumentos simplificadores que ven en el ajuste estructural, la explosión del desempleo y el funcionamiento de la economía global la razón y el sentido de la protesta en Argentina. Generalidades que si bien son ciertas en un sentido deben servirnos como punto de partida heurístico para mirar de cerca y en profundidad los qué, los cómo y los por qué de la beligerancia popular.

En el transcurso de la última década han nacido muchas organizaciones que han de marcar el pulso de la acción colectiva en los años venideros. Podríamos nombrar algunas de las que ocupan las primeras planas de los diarios y preocupan a las autoridades, como la Federación de Tierras y Vivienda, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, el Movimiento Territorial de Liberación, el Polo Obrero, la Coordinadora Aníbal Verón o el Movimiento de Trabajadores Teresa Rodríguez. Multiplicidad de organizaciones que, aun con diferencias políticas, ideológicas y tácticas importantes dan cuenta del ritmo que ha tenido la beligerancia popular en los últimos años. Nadie puede predecir su destino ni el de la protesta en general. Es difícil establecer el

impacto inmediato que la acción colectiva tiene en las instituciones democráticas y en la cultura política, o si ésta servirá o no como —citando a la maestra santiagueña— “lectión para los políticos”. La inmediatez y la urgencia de las discusiones sobre la situación actual del país, sobre las “motivaciones” de los manifestantes, sobre la presencia o ausencia del proverbial agitador entre la multitud, sobre el carácter anárquico, espontáneo, u organizado de la protesta, sobre la violencia que ocurre en las manifestaciones (quizás haga falta recordar que la violencia colectiva es producto de una *relación* entre estado y ciudadanos más que de intenciones individuales y que, hasta donde muestra la evidencia, la mayor parte de la violencia física en estos diez años —medida en muertos y heridos durante acciones colectivas— ha sido producida por agentes del estado) nos puede hacer perder de vista lo que *sabemos* sobre el efecto que la acción colectiva beligerante ha tenido en la democracia en otros tiempos y lugares: la lucha popular, en el largo plazo, incide de manera positiva en la trayectoria democrática. No se trata de un optimismo celebratorio sino de una lectura detenida del registro histórico. Como escribe Charles Tilly (1997), sin duda uno de los más perspicaces analistas de la relación entre protesta y vida democrática a través de la historia:

“Las instituciones democráticas duraderas surgen de luchas repetidas, de largo plazo, en las que trabajadores, campesinos y otra gente común han estado involucrados... las revoluciones, rebeliones y movilizaciones de masas marcan una diferencia significativa entre un país y otro con respecto al alcance de la democracia”.

Al escribir sobre los grupos subalternos —y más aun cuando procuramos entender sus acciones conjuntas— siempre navegamos entre dos posiciones extremas igualmente perniciosas: interpretaciones miserabilistas e interpretaciones populistas. Bajo la influencia de las primeras tendemos a ver a la protesta como el acto inconducente, derrotado desde su inicio, de las víctimas de un sistema todopoderoso. Según las segundas —más comunes entre los cientistas sociales— nos disponemos a ver en cada protesta un acto de resistencia heroica de un “pueblo” invulnerable, sin rastros de dominación ni de las cicatrices que sin duda deja la miseria. Si queremos comprender la dinámica beligerante debemos evitar caer en esta nociva antinomia y observar con más detenimiento no sólo a la protesta sino a las continuidades que ésta tiene con la vida cotidiana de quienes durante días, semanas o meses expresan su frustración, su necesidad, su desesperación y/o sus demandas en rutas, calles y plazas del país. Allí, en ese ir y venir del barrio a la barricada, al corte o a la plaza se encuentran muchas de las respuestas a los interrogantes que aún tenemos sobre la beligerancia popular.

Bibliografía

- M. A. Aguilar y E. Vázquez: *De YPF a la ruta: un acercamiento a Tartagal*, en *Trabajo y población en el noroeste argentino* (editores: Marta Panaia, Susana Aparicio, y Carlos Zurita) Buenos Aires, La Colmena, 2000.
- R. Aronskind: *¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformaciones económica en los 90*, Buenos Aires, Libros del Rojas UBA, 2001.
- A. Barbeito y R. Lo Vuolo: *La modernización excluyente*, Buenos Aires, Losada, 1992.
- L. Beccaria y N. López: *Notas sobre el comportamiento del mercado de trabajo urbano en Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina* (editores: Luis Beccaria y Néstor López) Buenos Aires, Losada, 1996.
- O. Cetrángolo y L. Golbert: *Desempleo en Argentina: magnitud del problema y políticas adoptadas*, CECE: Serie Estudios 8, 1995.
- M. Edelman: *Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics*, Annual Review of Anthropology, 2001.
- M. Farinetti: *El estallido: la forma de la protesta*, versión manuscrita, 2000.
- *¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina*, en *Trabajo y Sociedad* 1, julio-septiembre, 1999. <http://habitantes.elsitio.com/proit/zmarina.htm>
- O. Favaro y otros: *La conflictividad social en Neuquén. El movimiento centralquense y los nuevos sujetos sociales*, en *Realidad Económica*, 1997.
- L. Golbert: *Viejos y nuevos problemas de las políticas asistenciales en* CECE: Serie Estudios 12, 1996.
- R. Gould: *Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris From 1848 to the Commune*, Chicago, University of Chicago Press, 1995.
- D. Merklen: *Asentamientos en La Matanza. La terquedad de lo nuestro*, Buenos Aires, Catálogos, 1991.

- M. Murmis y S. Feldman: *De seguir así, en Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina* (editores: Luis Beccaria y Néstor López) Buenos Aires, Losada, 1996.
- M. Prevot Schapira: *Las políticas de lucha contra la pobreza en la periferia de Buenos Aires, 1984-1994 en Revista Mexicana De Sociología* 59/2, 1996.
- Rodríguez Larreta y otros: *Descentralización de políticas sociales. Segundo informe de avance*, Buenos Aires, 2000.
- D. Rothen: *Global-Local Conditions of Possibility: The Case of Education Decentralization in Argentina*, (Ph. D. Dissertation) Department of Education, Stanford University, 2000.
- P. Sánchez: *El Cutralcago. La pueblada de Cutral Cò y Plaza Huincul*, Buenos Aires, Cuadernos de Editorial Ágora, 1997.
- F. Schuster: *La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política*, versión manuscrita, 1999.
- A. Scribano: *Argentina "cortada": cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste, en Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste*, (editora: Margarita López Maya), Venezuela, Nueva Sociedad, 1999.
- S. Tarrow: *Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics*, New York, Cambridge University Press, 1998.
- E. P. Thompson: *Customs in Common*, New York, The New Press, 1993.
- Ch. Tilly: *The Contentious French*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1986.
- *How to Detect, Describe, and Explain Repertoires of Contention*, The Working Paper Series (Working Paper No. 150), New School for Social Research: 1-42, 1992.
- *Parliamentarization of Popular Contention in Great Britain, 1758-1834*, Theory and Society 26: 245-73, 1997.
- *Roads From Past to Future*, Lanham, Mass., Rowman and Littlefield, 1997.